

COMISIÓN DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS PARA UNA NUEVA LEY DE AMPARO

PROYECTO DE LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Coordinador General: Ministro Humberto Román Palacios
Ministro Juan N. Silva Meza
José Ramón Cossío Díaz
César Esquinca Muñoa
Héctor Fix-Zamudio
Javier Quijano Baz
Manuel Ernesto Saloma Vera
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

1° -Marzo-2001

LE
I 150
P769P
ej. 1

**INFORME DEL MINISTRO
HUMBERTO ROMÁN PALACIOS
COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
ANÁLISIS PARA UNA NUEVA LEY DE AMPARO**

69432

SEÑOR MINISTRO GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL.

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señora y Señores Ministros.

“Cuanto más individualmente débiles son los miembros de una sociedad, más probabilidades tiene ésta de su duración, porque no tienen entonces seguridad, sino permaneciendo unidos”

(Alexis de Tocqueville. “La Democracia en América”)

La Comisión de Análisis de Propuestas para una nueva Ley de Amparo, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó integrar e instaló el 17 de noviembre de 1999, entregó a ustedes, el 29 de agosto de 2000, un proyecto de Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un proyecto de reformas a la Constitución citada, todo ello precedido de una introducción en la que explicamos los puntos fundamentales de los cambios esenciales en relación a la Ley de Amparo vigente y a los preceptos Constitucionales mencionados.

En tal ocasión dentro de un ámbito incluyente y abierto a la recepción de las opiniones de diversos e importantes sectores de la sociedad mexicana, realizamos una descripción general de los trabajos realizados, en la que se procuró precisar los documentos recibidos, las ponencias de reformas a los preceptos de la Ley de Amparo, los Foros de Análisis de propuestas que se efectuaron y el desarrollo de nuestras sesiones de trabajo.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó la impresión de 19,000 ejemplares del documento, que fue totalmente distribuido a integrantes de la comunidad jurídica nacional, comprendiendo desde luego Ministros, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Senadores y Diputados, especialmente de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores; y las Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, Directores Jurídicos de las Secretarías de Estado, Magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación, del Tribunal Agrario, Presidentes de Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje y otros servidores públicos federales; asimismo, se remitieron ejemplares a Magistrados de Tribunales Superiores de Justicia, Procuradores Generales de Justicia y miembros de las Legislaturas estatales; y, desde luego, al distribuir el proyecto se incluyó a los maestros de las Facultades

de Derecho de toda la República, especialmente quienes imparten la Cátedra de Constitucional, de Garantías y de Amparo, a las asociaciones de abogados y a todos los profesionales del derecho que en alguna forma se interesaron en conocer el proyecto; la aceptación del proyecto y su demanda motivó la alternativa de realizar una impresión mayor o difundirlo de otra manera; para mayor facilidad se optó por publicarlo íntegramente en la Red Jurídica Nacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Intranet) y en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (Internet), datos que se difundieron con amplitud, con la finalidad de que cualquier persona que tuviese interés real y efectivo en conocer el proyecto, pudiera tener acceso al mismo.

Conforme al propósito inicial la Suprema Corte de Justicia de la Nación convocó a un Congreso Nacional de Juristas que se efectuó los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2000 en la Ciudad de Mérida, Yucatán, solicitando a los integrantes de la Comisión su participación.

Con motivo de la convocatoria al Congreso se recibieron 249 documentos relacionados con el proyecto de Ley de Amparo y que con éste, sirvieron de base para motivar la discusión propositiva en las mesas de trabajo. Cabe aclarar que con

posterioridad se siguieron recibiendo propuestas hasta hacer un total de 285.

A invitación expresa o por determinación propia acudieron al Congreso 280 personas, siendo pertinente precisar que de ellas 45 son Magistrados Federales y 15 Jueces de Distrito, los demás que intervinieron fueron Senadores y Diputados Federales, Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de las Legislaturas de todas las entidades federativas, representantes de las asociaciones de abogados de toda la República, maestros de las Facultades y Escuelas de Derecho y Académicos en general.

En la ceremonia de inauguración del Congreso tuvieron participación las siguientes personas Lic. Arturo Záldivar Lelo de Larrea, miembro de la Comisión, Magistrado Jorge Eden Wynter García, Coordinador general de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Décimo Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación, el Ministro Humberto Román Palacios y el Ministro Genaro David Góngora Pimentel Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien hizo la declaratoria de inauguración.

Por razones de logística y a efecto de hacer mas fluidos los trabajos, se integraron 6 mesas con asistencia promedio de 40 personas cada una, coordinadas por los miembros de la Comisión a excepción de los señores Ministros Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza, teniéndose cuidado que la integración de la mesa fuese incluyente, por ello participaron en cada una representantes de los distintos grupos que acudieron al Congreso, es decir Magistrados Federales o Estatales, Jueces de Distrito, y, en mayor número, estuvieron presentes Senadores, Diputados, Catedráticos e investigadores, y Abogados postulantes.

En ambiente de absoluta cordialidad, que de ninguna manera excluyó la posibilidad de disentir de criterios y de expresar opiniones a favor o en contra de las intervenciones, participaron en todas las mesas cada una de las personas que las integraron.

En la ceremonia de clausura, dieron cuenta de la relatoría de cada mesa de trabajo, cada uno de los Coordinadores, Dr. José Ramón Cossío Díaz, Magistrado César Esquinca Muñoa, Dr. Héctor Fix-Zamudio, Licenciado Javier Quijano Baz, Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera y Licenciado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; después intervinieron la Magistrada Migdalia Rodríguez Arcovedo Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, el Licenciado Alejandro Ogarrio Ramírez España

Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A. C. y el Ministro Juan N. Silva Meza quien además hizo la declaratoria formal de clausura del Congreso.

Por instrucciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión procedió al análisis de las propuestas recibidas y de las memorias que se hicieron respecto de cada mesa a fin de adecuar el proyecto a las opiniones recibidas en el Congreso Nacional de Juristas; con la finalidad de que se tenga una idea del material con el que se contaba, es oportuno precisar que a cada uno de los integrantes de la Comisión, se le hizo entrega de todos los documentos recibidos que constan en 4231 cuartillas, además se les entregó el análisis de las propuestas específicas recibidas en cada una de las seis mesas de trabajo y la compilación del análisis citado en un solo documento, que incluye 360 propuestas, de las cuales 347 se refieren a los artículos del proyecto y 13 son de carácter general.

La Comisión procedió al estudio acucioso de la documentación entregada por los profesionales del Derecho de los diversos sectores de las actividades jurídicas y a formular las adecuaciones correspondientes al proyecto que había elaborado, generándose por lo tanto un nuevo proyecto que en esta fecha nos permitimos entregar.

Como había ocurrido con anterioridad, después del Congreso Nacional de Juristas cada uno de los miembros de la Comisión por separado o en conjunto, fuimos invitados a participar en diversos foros, para informar y escuchar propuestas, fue así como intervenimos ante prestigiados foros entre los cuales podemos mencionar el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Libre de Derecho, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Academia Nacional de Seguridad Pública, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A. C. en todos ellos se advirtió el interés de los profesionales del Derecho en el proyecto de Ley de Amparo y se reiteró el clamor popular de la necesidad de su expedición, para que su contenido normativo plasme ese sentir y se convierta en instrumento que logre el fácil acceso y ágil procedimiento que culmine con la pronta resolución a la pretensión que ejerce el gobernado frente al acto de autoridad.

En esta fecha reiteramos cada uno de los miembros de la Comisión de Análisis de propuestas para una nueva Ley de Amparo, nuestro agradecimiento al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la oportunidad de intervenir y ser creativos en esta encomienda tan honrosa; en ella pudimos

advertir que en el medio jurídico nacional, al que pertenecemos, en sus diversos sectores, existen espíritus penetrados por un gran amor a la ciencia del Derecho, capaces de sentir y pensar como nosotros, tal vez con distinto matiz en su enfoque, pero con un mismo ideal, que se vio reflejado en el desempeño de la labor conjunta en la que pusimos nuestro mejor esfuerzo; ahora concluimos con el deseo de que fructifique el propósito de ese alto Tribunal, de que la sociedad mexicana cuente con una nueva Ley de Amparo, acorde a sus actuales necesidades. Por nuestra parte, tenemos una gran satisfacción, la que brinda el deber cumplido.

México, Distrito Federal, a 1° de marzo de 2001

MINISTRO HUMBERTO ROMAN PALACIOS

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE
LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

INTRODUCCIÓN

El juicio de amparo es la institución jurídica más importante de nuestro país. Desde su nacimiento en el siglo XIX ha sido parte de la conciencia de la nación mexicana. Su presencia es una constante en el desenvolvimiento político y social de México. No podría explicarse nuestra manera de entender el Derecho al margen de la figura procesal del amparo.

Con el devenir del tiempo el juicio de amparo ha desempeñado una labor más amplia que lo que podrían sugerir sus antecedentes remotos. El amparo ha evolucionado hasta convertirse en una compleja institución a través de la cual se cumplen funciones proteccionistas que en otros regímenes se cubren mediante instituciones procesales específicas. Por tanto, no es factible la comparación con los medios de defensa que bajo la denominación de *amparo* existen en distintos países. En su caso, el análisis comparado debe partir del estudio de los sistemas integrales de justicia constitucional.

En este sentido, es sabido que el amparo en el siglo XIX fue una institución de vanguardia y que, sin negar la influencia que recibió de origen norteamericana e hispánica en diversos grados, pronto

asumió un perfil propio y sirvió de ejemplo para distintas instituciones procesales en el mundo.

El juicio de amparo ha sido regulado por diversos cuerpos normativos. Durante la vigencia de la Constitución de 1857, en cuyos artículos 101 y 102 se considera que el amparo se consolidó en su visión originaria, se expidieron las leyes reglamentarias del 30 de noviembre de 1861, del 20 de enero de 1869 y del 14 de diciembre de 1882. Posteriormente, el amparo se rigió por el Código Federal de Procedimientos Civiles de 6 de octubre de 1897 y por el de 26 de diciembre de 1908.

Durante la vigencia de la Constitución de 1917 se han expedido las leyes de amparo de 18 de octubre de 1919 y la de 10 de enero de 1936, siendo ésta última la que hasta la fecha regula la institución del amparo.

La Ley de Amparo vigente es la que durante un lapso mayor ha regido el funcionamiento del juicio de amparo. Debe reconocerse que no se trata de un cuerpo normativo que responda a las necesidades del mundo moderno. Si bien se le han hecho a lo largo del tiempo reformas que la han actualizado lentamente en algunos aspectos específicos, se ha tratado siempre de enmiendas insuficientes, muchas de ellas carentes de técnica

legislativa y sin que se haya reflexionado sobre los problemas de fondo que presenta la institución.

Hoy es una idea ampliamente compartida que la Ley de Amparo en vigor se encuentra desfasada con la realidad, que presenta un retraso significativo con las instituciones de justicia constitucional modernas y que ha dejado de prestar una protección eficaz a los gobernados frente a la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del poder. Los retos a que se enfrenta la justicia del siglo XXI difieren en mucho de las circunstancias en las que nace y se desenvuelve la Ley de Amparo de 1936. Una sociedad más plural y participativa, más informada ante los prodigios de las comunicaciones modernas; el avance tecnológico que dota al mundo de un nuevo dinamismo; el evidente desarrollo del derecho público que presenta inéditos problemas; para no hablar de las trascendentes modificaciones que a la vida de los pueblos ha traído el proceso de globalización, son, entre otras muchas circunstancias, evidencia de que la defensa de los particulares no puede seguir atada al pasado. Ante la nueva realidad se imponen instituciones renovadas.

El proyecto que se presenta propone trascendentes modificaciones a la institución más prestigiada del derecho mexicano que, de ser aprobadas, significarían volver a poner al

amparo a la vanguardia de la justicia constitucional en el mundo y adecuarlo a las exigencias de la modernidad; pero, sobre todo, lo que es más importante, volvería a ser un verdadero instrumento de defensa de los derechos fundamentales de los gobernados y un eficaz mecanismo controlador del ejercicio del poder.

ESTRUCTURA DE LA NUEVA LEY

Como se sabe, nuestro juicio de amparo tiene como característica fundamental el que mediante el mismo se tramitan y resuelven una serie de cuestiones que en otros órdenes jurídicos se enfrentan mediante procesos variados. Considerando posiciones doctrinales expresadas en nuestro país desde hace tiempo, algunas experiencias de derecho comparado y propuestas que se han elaborado, se planteó la alternativa de continuar con la estructura legal en vigor o dar una regulación propia y separada a cada uno de los procesos que es posible identificar bajo el rubro genérico de juicio de amparo. La solución a la que finalmente se arribó fue mantener la estructura vigente. La razón radica en la forma en que históricamente se ha ido constituyendo nuestro juicio, primordialmente en la distinción entre las vías directa e indirecta. Estas dos vías dificultan enormemente distinguir con claridad y fácil manejo cada uno de los procesos de amparo.

Aun cuando se considera que es mejor mantener en general la estructura tradicional, se pretenden introducir modificaciones ahí donde por razones de integración o de prelación lógica o cronológica de una materia es recomendable. Bajo estas directrices la presente iniciativa distingue, por ejemplo, dentro del capítulo de la competencia entre las reglas para establecerla y la forma de resolver los conflictos que con motivo de ella pudieran surgir. Asimismo, las disposiciones relativas a los incidentes fueron colocadas con posterioridad a los supuestos de improcedencia y sobreseimiento, pues los primeros habrán de darse una vez que se esté tramitando el juicio. Por su parte, los preceptos relativos a los recursos fueron divididos por secciones y agrupados a fin de facilitar su identificación y manejo.

Otra cuestión relativa a la estructura tiene que ver con el juicio de amparo en materia agraria. Las posibilidades eran dos: mantener esa materia en un libro por separado como sucede en la Ley de Amparo vigente, o introducir en la parte correspondiente de la nueva ley los preceptos relativos a la materia agraria. La solución que se propone es en el segundo sentido ya que es acorde con una mejor técnica legislativa.

Por un lado, en virtud de las reformas en materia agraria de 1992, una gran cantidad de esos asuntos primeramente se resuelven por los tribunales agrarios y llegan al amparo por la vía directa; y por otro, se han previsto disposiciones especiales –plazo de promoción de la demanda, suplencia de queja, etc.– dentro del procedimiento indirecto. Esta solución hace congruente al juicio de amparo con las modificaciones a la materia agraria y permite que los grupos más desprotegidos de ese sector sigan contando con una posición más favorable en los procesos de amparo.

Por lo anterior, el que la iniciativa no contemple un libro segundo relativo a la materia agraria como sucede en la ley vigente no significa que se pretendan desaparecer los beneficios con los que cuentan hoy los ejidatarios o comuneros, simplemente se incorporaron las prerrogativas procesales a los capítulos correspondientes del proyecto.

TERMINOLOGÍA

En cuanto a las cuestiones de terminología, deben hacerse tres precisiones. En primer lugar, ante la desaparición de los libros de la ley, la denominación más general es el título, mismo que se conforma por capítulos, éstos, a su vez, se componen por secciones y estas últimas, finalmente, por partes. Como se

apuntó en el apartado anterior, estas designaciones se pretenden insertar para delimitar conjuntos normativos que en el ordenamiento en vigor no se distinguen adecuadamente.

En segundo lugar, en el proyecto que se formula se corrige la denominación tradicional de algunos conceptos equivocados, polivalentes o ambiguos; igualmente, se utiliza un cambio en las expresiones cuando las sugeridas se consideran más precisas. En cualquiera de los dos casos, se tuvo cuidado en no cambiar las expresiones cuando existiera una tradición bien arraigada en criterios jurisprudenciales y en precedentes, o cuando el uso de las mismas se encontrara tan extendido que los perjuicios del cambio fueran mayores al beneficio.

En tercer lugar, se introducen las expresiones tribunales colegiados de circuito de amparo y tribunales colegiados de circuito de apelación, a efecto de distinguir, por una parte, los actuales órganos colegiados y, por la otra, aquéllos en que se transformarían los tribunales unitarios.

DISPOSICIONES GENERALES

a) Objeto de protección del juicio de amparo

En el proyecto se propone ampliar el ámbito protector del juicio de amparo. Es sabido, que de conformidad con la legislación vigente el amparo procede por violación de garantías individuales. La Suprema Corte sostuvo que las fracciones II y III del 103 de la Constitución se subsumen en la fracción primera. A pesar de que las garantías de legalidad de los artículos 14 y 16 de la Constitución permiten un gran ámbito de protección del juicio de amparo, se considera conveniente proteger de manera directa los derechos humanos establecidos en instrumentos internacionales de carácter general.

En el proyecto se propone que el amparo proceda por violación de garantías, ya sean individuales o sociales, así como por violaciones a los derechos humanos establecidos en cinco instrumentos internacionales, a saber: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Debe destacarse que, en primer término, se lograría la eficacia jurídica plena de las garantías sociales, orgullosamente creación a nivel constitucional de la Carta de Querétaro. Por otro lado, se tutelarían de manera directa una serie de derechos humanos que amplían y complementan las garantías individuales previstas en la Constitución. Lo que, además, fortalecería la cultura de la defensa de los derechos humanos, al dotarlos de protección normativa a través de una labor jurisdiccional que los aplique y los enriquezca.

La limitación de la protección directa a través del juicio de amparo a los cinco instrumentos de carácter general aludidos, se justifica en atención a que se consideró ante el gran número de tratados internacionales y su diversidad temática, que muchos de ellos responden simplemente a circunstancias políticas coyunturales por un lado, y por otro, a la necesidad de englobar una diversidad de intereses de los distintos Estados y sus diferentes formas de organización política, lo que genera fórmulas ambiguas cuya protección directa a través del amparo podría provocar consecuencias indeseadas. Sin embargo, estos tratados encuentran defensa a través de aducir la violación de las garantías individuales de los artículos 14 y 16 constitucionales.

b) Interés para acudir al amparo

Como se menciona en la exposición de motivos de la reforma constitucional, se pretende ampliar las posibilidades para que las personas puedan acudir al amparo. En tal virtud, se pretende otorgar al quejoso legitimidad para acudir al juicio cuando sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. En el primero de los casos se trata del interés jurídico que hasta ahora ha prevalecido en el juicio de amparo, es decir, el quejoso podrá acudir al juicio cuando se haya violado una garantía individual o alguno de los derechos consagrados por los instrumentos internacionales de carácter general y esa violación le afecte de manera personal y directa. En el segundo caso, el sistema es innovador, ya que se introduce el concepto de interés legítimo.

El interés legítimo es una institución jurídica ya desarrollada en otros países. Consiste en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. El interés legítimo se ha desenvuelto de manera preferente en el derecho administrativo y parte de la base de que existen normas que imponen una conducta obligatoria de la administración, pero tal obligación no se corresponde con el derecho subjetivo de que sean titulares determinados particulares. Si se tratara de proteger un interés simple, cualquier persona podría exigir que se cumplan esas

normas por conducto de la acción popular. Este tipo de interés no es el que se quiere proteger. Puede haber gobernados para los que la observancia o no de este tipo de normas de la administración pública resulte una ventaja o desventaja de modo particular respecto de los demás. Esto puede ocurrir por dos razones, en primer lugar puede ser el resultado de la particular posición de hecho en que alguna persona se encuentre, que la hace más sensible que otras frente a un determinado acto administrativo; en segundo lugar, puede ser el resultado de que ciertos particulares sean los destinatarios del acto administrativo que se discute. Ésta es la noción del interés legítimo, es decir que ciertos gobernados puedan tener un interés cualificado respecto a la legalidad de determinados actos administrativos.

La posibilidad de acudir al amparo mediante el interés legítimo abre enormes oportunidades de control de actos de la administración pública que hasta ahora sólo en algunos casos es factible proteger.

Cabe hacer mención que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá ser titular de un interés jurídico. Es decir, en estos casos la legitimación para acudir al juicio de amparo no cambiaría.

c) Concepto de autoridad responsable

El proyecto propone la ampliación del concepto de autoridad para los efectos del amparo. Este concepto ha sido uno de los de más lento desarrollo y de los que presenta un mayor atraso. Es menester recordar que a principios del siglo XX, la Suprema Corte sostenía criterios más evolucionados en la materia que los que se han sostenido con posterioridad. La Suprema Corte para determinar quién es autoridad para los efectos del amparo privilegiaba el análisis de la naturaleza del acto reclamado, con independencia del carácter formal de quien lo emitiera.

Con efectos nocivos para la protección de los gobernados este principio toral se perdió. Se consideró erróneamente, en una primera etapa, que era indispensable la fuerza pública en el concepto de autoridad responsable. La posterior necesidad de considerar como autoridad para efectos del amparo únicamente a los órganos centralizados del Estado, implicó un paso más en esta línea formalista y antiproteccionista.

La Suprema Corte en su actual integración sustentó un criterio más evolucionado, merced al cual los organismos descentralizados pueden ser autoridades para los efectos del

amparo cuando de manera unilateral y obligatoria afectan la esfera jurídica de los particulares. Sin embargo, las necesidades del derecho público contemporáneo exigen dar un paso significativo hacia delante.

En el proyecto se propone dar la prioridad –como lo hizo la Suprema Corte a principios del siglo XX–, a la naturaleza propia del acto reclamado, por encima del carácter formal de quién lo emite. En este sentido se consideraría como autoridad para efectos del amparo, a quien emite el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; al margen de la naturaleza formal del emisor. El derecho administrativo moderno presenta múltiples casos en los que organismos descentralizados e inclusive personas particulares, realizan funciones que originariamente prestaba el Estado y que en su actividad pueden afectar la esfera jurídica de los particulares. Es necesario, entonces, que las violaciones a los derechos fundamentales de los gobernados sean reparadas sin importar de donde emanen.

El proyecto propone un concepto abierto que permita su actualización a través de la interpretación jurisdiccional. Es preferible privilegiar la naturaleza del acto reclamado, en lugar de establecer un catálogo de entidades en contra de las cuales

procedería el juicio de amparo, ya que sería imposible prever de manera exacta la dinámica social.

d) Representación para menores de edad

Dada la importancia que conlleva la representación en el juicio de amparo en los casos en que deben intervenir como parte los menores de edad, se propone que puedan ser representados en el juicio de amparo preferentemente por un familiar cercano, con el fin de proteger cabalmente sus derechos ante la autoridad jurisdiccional. La anterior consideración se basa en los lazos afectivos que generan las relaciones familiares y que pueden provocar un interés directo en la defensa del menor. La calificación que el juez deba hacer de quién es el familiar cercano idóneo para representar al menor dependerá del grado de parentesco y del caso concreto. En el supuesto de que dicho familiar cercano tenga conflicto de intereses, el órgano jurisdiccional de amparo designará a persona diversa.

e) Representación del Presidente de la República

En virtud de las reformas de 1994 al artículo 102 constitucional, apartado A), y de 1996 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es necesario adecuar a las mismas el texto

actual del artículo 19 de la Ley de Amparo, el cual se estableció de acuerdo con la redacción anterior del citado artículo 102 de la Constitución, que disponía que el Procurador General de la República, además de sus atribuciones como jefe del ministerio público tenía la de consejero jurídico del Gobierno Federal.

Por tanto, si dicha asesoría, según las reformas constitucional y legal antes mencionadas, se atribuye actualmente a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, es al titular de la misma al que corresponde la representación del Jefe del Ejecutivo ante los órganos jurisdiccionales.

En congruencia con lo anterior, en el proyecto se propone que el Presidente de la República pueda ser representado en el juicio de amparo por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.

f) Representación de titulares de las entidades federativas

En principio, las autoridades deben acudir al juicio de amparo sin representación alguna. Sin embargo, la ley vigente prevé excepciones cuando se trata de actos de titulares de las dependencias federales debido a que por sus múltiples ocupaciones y por la gran cantidad de juicios en los que se

encuentran involucrados hace prácticamente imposible que fueran atendidos personalmente.

En el proyecto se pretende otorgar a los gobernadores de los estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los procuradores y a los titulares de las dependencias estatales o municipales esa excepción pues las razones a nivel federal pueden ser perfectamente aplicadas a nivel local.

g) Aviso al Procurador General de la República

En los casos de extrema gravedad que son los que se refieren a peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, en los que no se logre la comparecencia del quejoso se pretende introducir una medida para evitar abusos por parte del ministerio público.

En el régimen vigente, si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo para lograr la comparecencia del quejoso en los casos a que se refiere el párrafo anterior, ésta no

se consigue, el juez consigna los hechos al ministerio público. Lo que se pretende es que si la autoridad señalada como responsable de alguno de esos actos fuera el ministerio público federal, se haga del conocimiento del Procurador General de la República para evitar que queden paralizadas las investigaciones y para que éste tome las medidas conducentes.

h) Fallecimiento del quejoso o del tercero interesado

Se propone un nuevo mecanismo para que en los casos de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, los juicios no queden paralizados, siempre que no se trate de derechos estrictamente personales.

Este mecanismo consiste en que en el caso de que el quejoso o tercero interesado fallezcan careciendo de representación en el juicio de amparo, se otorgue un plazo de sesenta días para que intervenga la sucesión; si en ese plazo no interviene, se ordenará al ministerio público federal que la localice o haga la denuncia correspondiente.

Asimismo, se establece la obligación a cualquiera de las partes que tengan noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deban hacerlo del conocimiento de la autoridad judicial.

i) Plazos

Tema de trascendencia es el relativo a los plazos de promoción del juicio de amparo. Existe una demanda generalizada de la comunidad jurídica en el sentido de que éstos se amplíen.

Dicha ampliación obedece a diversas razones. La primera consiste en otorgar el tiempo necesario que haga factible que las partes preparen con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en que basan sus pretensiones. Lo anterior logrará que la calidad de los litigios se eleve y, con ello, se facilite la función del juzgador sobre los puntos de derecho que habrá de resolver. Asimismo, la ampliación de los plazos, no sólo para la presentación de la demanda sino de aquéllos establecidos para la tramitación del juicio, permitirá un cabal acceso a la justicia y que la calidad de ésta se incremente.

En ese contexto, se propone modificar el plazo general para la promoción del juicio de amparo de quince días a treinta.

Cabe destacar que se proponen como excepciones a dicho plazo las siguientes: a) de cuarenta y cinco días tratándose del amparo contra normas generales autoaplicativas; b) de dos años cuando se trate de sentencias condenatorias en un proceso penal o de actos de privación de los derechos agrarios de ejidos y comunidades, y c) no establecer plazo alguno, tratándose de actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, en los que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo.

Es pertinente señalar algunos cambios importantes en cuanto a las sentencias condenatorias en materia penal y respecto a los actos que pueden tener como consecuencia la privación de derechos agrarios de ejidatarios y comuneros.

La ley vigente no prevé plazo alguno para la presentación de la demanda cuando se trate de sentencia condenatoria en materia penal. Se ha argumentado que la razón principal para que este plazo no exista consiste en que los actos en esta materia afectan la libertad, lo que constituye, después de la vida, el más

importante bien jurídico tutelado por el orden normativo. Por ello se estimaba conveniente que siempre estuviera latente la posibilidad de defensa para el gobernado en contra de tales actos.

Sin embargo, en los últimos años esta apreciación se ha ido modificando como consecuencia de quienes sostienen que a la víctima u ofendido por el hecho delictivo se le deben garantizar sus derechos en el procedimiento penal. El fenómeno penal implica una situación de conflicto entre el procesado y el ofendido, ambos gobernados que deben ser protegidos por el sistema garantista que consagra nuestra Constitución, y cuyos derechos deben ser equilibrados por el orden jurídico, al que evidentemente no escapa el juicio de amparo.

Si bien es cierto que el juicio de amparo sirve como un instrumento de defensa para el procesado o sentenciado, la realidad ha demostrado, en diversas ocasiones, que ha sido utilizado como instrumento para evadir la aplicación de la ley, o bien para diferir el cumplimiento del pago para el caso de la reparación del daño, lo que trae como consecuencia la afectación a la víctima u ofendido por el delito.

En virtud de lo anterior se propone establecer un plazo de dos años para la presentación de la demanda cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal. Dicho plazo se estima suficiente para poder estructurar adecuadamente una demanda de amparo, a la vez que se considera como razonable para los efectos de los derechos que eventualmente el acto de autoridad pudiera generar al ofendido por el delito.

Por otro lado, es importante destacar, lo relativo a los plazos para la interposición de la demanda de amparo en materia agraria. En los casos en los que se promueva el juicio de amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal, se establece un plazo de dos años.

La ley vigente tampoco contempla un plazo para la presentación del juicio de amparo en estos casos. Si bien es cierto que esta medida se estableció con la finalidad de proteger un sector de la población que por circunstancias de pobreza y atraso cultural, se encuentra en estado de desventaja frente al resto de la sociedad, también lo es que la indefinición jurídica que esta situación conlleva, redundando en inseguridad jurídica respecto de los terceros

de buena fe que pretenden realizar cualquier acto jurídico en bienes inmuebles que son afectados por alguna resolución de las autoridades en materia agraria.

La inseguridad jurídica en la propiedad o posesión de estos bienes inmuebles se considera insostenible. El establecimiento de plazos otorga seguridad jurídica a las personas y a la sociedad misma. No es posible continuar con la inseguridad de la tenencia de la tierra, sobre todo cuando muchas de las propiedades que hoy son urbanas y que albergan a un gran número de personas, fueron en algún momento propiedades ejidales o comunales. Situaciones absurdas de impugnaciones de actos de décadas de antigüedad se han generado por no otorgar seguridad jurídica sobre las tierras con estas características.

Por lo anterior, el proyecto propone, con el establecimiento del plazo de dos años para la presentación del amparo en esta materia, otorgar plena seguridad jurídica a los gobernados. Además se considera que dos años es un periodo lo suficientemente amplio para posibilitar la defensa de los posibles derechos vulnerados de los núcleos de población ejidal o comunal.

j) Notificaciones

En este capítulo se propone una estructura más organizada y clara sobre la procedencia de cada uno de los tipos de notificaciones y sobre el trámite que debe seguirse en cada una de ellas. Asimismo, se pretenden introducir nuevos supuestos de notificaciones personales dada la importancia de distintas hipótesis que no prevé la ley vigente. Tales son los casos de la designación de representante común, el acuerdo por el que se apercibe al quejoso para que ratifique su escrito de desistimiento, las sentencias que no sean pronunciadas en la audiencia constitucional, el sobreseimiento dictado fuera de audiencia, la aclaración de sentencias y otros.

En cuanto a las notificaciones por oficio a las autoridades se prevé que en caso de que dicha notificación se recibiera en día inhábil, ésta surtirá sus efectos a partir del siguiente día hábil de la recepción para dar tiempo suficiente a la autoridad de ejercer sus derechos.

Un cambio que se espera ayudará a evitar dilaciones en la resolución de los juicios y que ha sido considerado por la comunidad jurídica como un paso importante para lograr este fin y evitar abusos del amparo, consiste en otorgar un plazo de veinte

días al quejoso para que entregue para su publicación los edictos que debe realizar a su costa cuando se trata de la primera notificación al tercero interesado. En la actualidad, al no establecerse plazo para esto, los juicios quedan paralizados y, en muchas ocasiones, los quejosos utilizan esta laguna únicamente para dilatar los procedimientos. Este mecanismo permitirá que si realmente existe un interés en la tramitación del juicio y verdaderamente no se conoce el domicilio del tercero interesado, los quejosos remitirán con prontitud los edictos para su publicación, ya que se prevé el sobreseimiento cuando dicha remisión no se haga en el plazo establecido.

El mecanismo anterior no debe perjudicar a las personas de escasos recursos que no cuenten con los medios económicos para la publicación de los edictos. Por tanto, se establece la posibilidad de que en esos casos, el juzgador ordene la publicación en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso.

k) Competencia

El proyecto propone que para la resolución de los amparos en materia agraria se determine la competencia de los tribunales colegiados de circuito de amparo tomando en consideración el

lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con lo anterior se pretende acercar la protección de la justicia federal al acudir al tribunal en cuya jurisdicción tenga efectos el acto reclamado.

Esto difiere de la regla general sobre la determinación de la competencia en el juicio de amparo directo, ya que para su resolución es competente el tribunal con jurisdicción en el lugar donde resida la autoridad que emita el acto reclamado, y el proyecto pretende posibilitar a los grupos más desprotegidos para que cuenten con una posición más favorable en los procesos de amparo en que deban participar. Por tal motivo se sugiere que la competencia en materia agraria se fije de acuerdo a la ejecución.

En cuanto a la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia se propone reglamentar el sistema que se prevé en la reforma constitucional al introducir la posibilidad de que el tribunal colegiado de circuito de amparo y las partes del juicio que corresponda, puedan solicitar a alguno o a varios ministros que propongan ejercer la facultad de atracción, quedando a la libre decisión de los ministros plantearlo al Pleno y sin expresión alguna sobre el particular.

l) Excusas y Recusaciones

En materia de impedimentos el proyecto propone que éstos puedan ser invocados por los ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito a través de la excusa, o bien que las partes los puedan hacer valer interponiendo la recusación.

Para substanciarlas en el caso de los tribunales colegiados se propone, tomar en cuenta que si la excusa o recusación se trata de un solo magistrado integrante de un tribunal colegiado, sea este órgano el que lo resuelva; si afecta a dos o más, lo decida otro tribunal colegiado, con lo cual se estima que el trámite de los impedimentos, ya por excusa, ya por recusación, se agilice y no permita que el asunto en que se originó quede paralizado.

m) Improcedencia

Uno de los aspectos relevantes de la propuesta es el concerniente al tratamiento de las causas de improcedencia, pues en ella se privilegia que los tribunales federales estén en aptitud de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o legalidad del acto que se reclama.

Por esa razón el proyecto propone que las causas de improcedencia sean de aplicación estricta y requieran prueba plena. Esto obligaría al juzgador a realizar un análisis profundo para determinar si se actualiza en extremo el supuesto de improcedencia que señala la ley. Con lo anterior se lograría la actualización del principio constitucional de que la regla general sea la procedencia del juicio de amparo y, sólo por excepción, no se entre al análisis del fondo del asunto.

En ese sentido se propone establecer la procedencia del juicio de amparo contra las decisiones tomadas por las legislaturas estatales en materia de suspensión o remoción de servidores públicos, en virtud de que no existe fundamento constitucional que deba reflejarse en la legislación secundaria.

Se propone también establecer la procedencia excepcional del juicio de amparo cuando se trate de las resoluciones de trámite dictadas en los procedimientos de declaratoria de procedencia y de juicio político en los que de manera grave se afecten los derechos de defensa del quejoso. La razón de este cambio radica, fundamentalmente, en la necesidad de judicializar la mayor parte de los procesos y decisiones de las autoridades, pues sólo así se logrará consolidar un Estado de Derecho. Cabe destacar que esto no debe significar una intromisión indebida en

los actos del Poder Legislativo que por su propia naturaleza son de orden público, por lo que se considera que en estos casos las autoridades de amparo no deberán suspender el procedimiento respectivo.

Se propone igualmente como excepción al principio de definitividad y por lo tanto procederá el juicio de amparo en aquéllos casos en que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Lo anterior ya se ha establecido por jurisprudencia atendiendo a la jerarquía de normas en nuestro sistema, pues no se considera procedente que un recurso previsto en una disposición jurídica inferior a las leyes secundarias, obstaculice la posibilidad de que el gobernado acuda a solicitar la protección de la justicia federal cuando la ley que rige el acto que se reclama no disponga nada al respecto.

En cuanto a las causas de improcedencia, se proponen las siguientes modificaciones:

En primer termino, se prevé que el juicio de amparo no proceda en contra de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, salvo los casos en que afecten los derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación, así como contra las

resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución en cuanto al carácter definitivo e inatacable que deben tener las resoluciones del Consejo y del Tribunal. En cuanto a las resoluciones del Consejo se establece la salvedad respecto de los derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación con el fin de garantizar la adecuada defensa de los particulares frente a las decisiones de ese órgano.

La improcedencia que se pretende establecer contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme, obedece a que debido precisamente a los efectos generales de dichas declaratorias, el asunto se considera cosa juzgada y por tanto, inútil la promoción del amparo. Esto sin embargo no conlleva una indefensión de los ciudadanos ante la aplicación por parte de la autoridad de la norma declarada inconstitucional, ya que para esos casos se prevé un mecanismo más ágil que se explica en el capítulo de cumplimiento de sentencias.

n) Incidentes

Los cambios que se proponen, en materia de incidentes, consisten fundamentalmente en establecer una tramitación genérica para dar claridad y evitar inútiles y confusas remisiones a la ley supletoria, así como dejar al arbitrio del órgano jurisdiccional de amparo que determine la forma en que debe ser resuelto. Para ello deberá atender las características del asunto y definir si lo resuelve de plano, si requiere de un especial pronunciamiento o si reserva su resolución para el momento de fallar el fondo.

Esta propuesta permitirá mantener ciertos procedimientos específicos o formas de resolución para aquellos incidentes a los que se les confiera un trámite especial, así como facultar al juzgador para decidir el procedimiento a seguir dadas las particulares situaciones que concurran en el caso sometido a su consideración.

ñ) Sentencias

El problema que se presenta hoy en día en materia de sentencias consiste en que debido a la complejidad de los asuntos, en algunas ocasiones las resoluciones llegan a presentar poca

claridad. El problema se agrava en los casos de amparo directo en los que no se precisan los efectos de las mismas, dejando a la autoridad responsable que debe cumplir con la misma en una confusión poco conveniente y que en nada ayuda a la impartición pronta y completa que ordena la Constitución. En virtud de lo anterior se propone no sólo que el juzgador de oficio o a petición de parte pueda aclarar la sentencia dentro de los tres días siguientes a su notificación, sino también se le establece la obligación de que en los amparos para efectos, precise éstos para su estricto cumplimiento.

La presunción de inocencia debe ser un principio rector de todo Estado de Derecho. No puede concebirse una institución que busca proteger los derechos y garantías de los individuos basado en principios incriminatorios para las personas. En tal virtud, el proyecto busca establecer disposiciones regidas por este principio sin dejar de salvaguardar el interés de la sociedad y de las víctimas para que los delitos no queden impunes.

Con ese espíritu, se establecen con claridad los efectos que tendrán las sentencias que concedan el amparo. Tratándose de asuntos del orden penal, en los que se reclame una orden de aprehensión o auto de formal prisión en los delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que otorgue el amparo

surtirá sus efectos de inmediato, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión. En los mismos supuestos, si se trata de delitos graves este principio no debe aplicarse como regla general. Sólo si el juez de manera excepcional y atendiendo a las circunstancias considera que aún tratándose de delitos graves la sentencia debe surtir efectos de inmediato así lo determinará, debiendo motivarlo debidamente por ser un caso de excepción.

En ambos casos cuando el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, el juez de amparo deberá dictar las medidas de aseguramiento que estime necesarias con el objeto de que el quejoso no evada la acción de la justicia.

En cuanto a la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, se introduce la obligación de aplicarla en favor del ofendido o de la víctima en los casos que tenga el carácter de quejoso que, como se desprende de la disposición constitucional, únicamente será cuando interponga amparo por el no ejercicio o desistimiento de la acción penal por parte del ministerio público.

Por lo que respecta a la suplencia de la queja en materias distintas de la penal, agraria y laboral, así como en los casos de menores e incapaces, se propone que proceda cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o particular recurrente una violación notoria de la ley que lo haya dejado sin defensa. Para evitar abusos y desviaciones derivados de la ley vigente, se establece que la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el juicio de amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento de origen. Se considera que el debido proceso legal es un derecho fundamental que debe respetarse, ya que a través del cumplimiento de las garantías mínimas que debe observar todo proceso, se combate la arbitrariedad y se asegura una justicia imparcial.

o) Medios de Impugnación

El capítulo de recursos de la ley vigente ha sido reiteradamente criticado por su deficiente técnica y confuso desarrollo. En el proyecto se propone darle una coherencia lógica a los medios de impugnación, con la finalidad de facilitar su comprensión y utilización.

La modificación más relevante tiene que ver con la transformación del recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de las resoluciones de amparo, en un incidente. Esto, por un lado, reconoce la naturaleza que procesalmente le corresponde a esta figura y, por el otro, acabaría con las dificultades derivadas de que contra las resoluciones de un recurso de queja proceda otro recurso de queja, como ocurre en la actualidad. Asimismo, se fortalece la defensa de los particulares ya que en el incidente respectivo es factible el ofrecimiento de pruebas tendientes a acreditar las pretensiones del promovente.

En otro orden de ideas, en la revisión adhesiva se recoge el criterio de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que los agravios en el recurso referido pueden fortalecer las consideraciones de la sentencia que orientaron el resolutivo favorable al recurrente, o impugnar las que concluyen en un punto decisorio que le perjudica.

En la ley vigente el auto que desecha una demanda de amparo se impugna a través de la revisión; por el contrario, el que la admite es recurrible en queja. Se considera que esta reglamentación es inadecuada pues el procedimiento intelectual del juzgador es idéntico en ambos casos, por lo que no se justifica complicar la impugnación mediante dos recursos distintos. En el proyecto se

propone que por medio de la queja se impugnen las resoluciones que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación.

Asimismo, se contempla la impugnación a través de la queja el reconocimiento del carácter de tercero interesado, lo que evitaría las afectaciones que tiene que soportar el quejoso ante la imposibilidad de recurrir este tipo de resoluciones como sucede con la legislación vigente.

También debe destacarse que se propone la procedencia del recurso de queja en contra de la autoridad responsable, cuando en amparo directo omite tramitar la demanda o lo hace en forma indebida. De esta manera se llena un vacío, ya que la ley actual no prevé medio de impugnación en estos casos.

PROCEDIMIENTOS DE AMPARO

El título segundo de este proyecto se refiere a los procedimientos de amparo. En ambos casos se pretende mejorar la estructura del ordenamiento vigente para lograr claridad y orden en la ley. En primer lugar se establecen los supuestos de procedencia y demanda, posteriormente los de substanciación y, finalmente, los relativos a la suspensión.

AMPARO INDIRECTO

a) Procedencia

Se pretende que la procedencia del juicio de constitucionalidad sobre normas generales se amplíe ya que en la actualidad la ley vigente se circunscribe a leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos federales o locales y decretos o acuerdos de observancia general. En el proyecto se contempla además la posibilidad de acudir al amparo indirecto cuando se impugnen las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y, tal vez lo que resulta más novedoso, las reformas a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos únicamente por lo que se refiere a los vicios que hubieran podido presentarse en el procedimiento de reforma. Cabe hacer hincapié en que, de aprobarse el proyecto, el amparo no será procedente contra el fondo de una reforma a la Constitución Federal, ya que éste constituye la voluntad misma de nuestro Constituyente Permanente que de ninguna forma puede estar sujeta a control jurisdiccional, sino únicamente podrá ser procedente contra el procedimiento mismo de la reforma que, de no ser conforme a derecho, haría formalmente imperfecta la norma suprema.

Asimismo, se especifica que la violación por la que puede solicitarse el amparo puede consistir en un acto o en alguna omisión que implique vulneración a las garantías individuales o a los derechos consagrados por los instrumentos internacionales a que se refiere el artículo 1° del proyecto. Cabe aclarar que los actos omisivos y negativos ya estaban contemplados en nuestro sistema de amparo. Lo que busca el proyecto es introducirlos de manera explícita, a efecto de facilitar su control.

Por otra parte, se considera necesario especificar en ley lo que se entiende por la última resolución cuando se trata de amparos contra actos de ejecución de una sentencia ya que esto ha provocado diversas interpretaciones. En tal virtud, se propone que se entienda como última resolución dictada en el procedimiento de ejecución aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En el mismo sentido, se introduce una nueva definición de última resolución en los procedimientos de remate que ya no consistiría en aquélla por medio de la cual se aprueban o desaprueban, sino en la que de forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, atendiendo a

la diversidad de formas en que esa figura puede regularse en las entidades federativas.

Debido a que de acuerdo con la Constitución la víctima o el ofendido por la comisión de un delito pueden impugnar el desistimiento de la acción penal por parte del ministerio público y a que dicha promoción es realizada por el representante social como parte en el proceso penal, se pretende establecer la procedencia del amparo indirecto contra dicha promoción que necesariamente deberá ir acompañada por la impugnación sobre el auto del juez que le recaiga. De esta forma, la víctima u ofendido deberá presentar el amparo una vez que el juez de la causa haya determinado la procedencia del desistimiento.

b) Demanda

Se pretende dar oportunidad al quejoso para que amplíe la demanda cuando no haya transcurrido el plazo para su promoción; cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con el acto reclamado, o cuando del informe con justificación aparezcan datos no conocidos por el quejoso. En este último caso podría presentar la ampliación dentro de los 15 días siguientes a la notificación del informe. Cabe aclarar que la opción del quejoso para ampliar la

demanda o presentar una nueva quedaría salvada ya que en estos casos no se pretende forzarlo a acudir al amparo únicamente mediante la ampliación, sino dejarle la oportunidad de decidir la forma en que prefiere impugnar los actos reclamados.

c) Substanciación

Así como se pretende otorgar mayores plazos tanto al quejoso para presentar la demanda como al órgano jurisdiccional de amparo para resolver los asuntos, también debe otorgarse a la autoridad responsable un plazo mayor para rendir su informe con justificación. Esto permitirá un equilibrio procesal entre las partes. Asimismo, se considera necesario establecer un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación al quejoso del acuerdo que le da vista con el informe de la autoridad y la celebración de la audiencia para que aquél tenga oportunidad de prepararla. Por último se introduce en el proyecto el criterio jurisprudencial, que dispone que la autoridad al rendir el informe no puede legalmente mejorar la fundamentación ni motivación del acto reclamado ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas para pronunciarlo, ya que el acto reclamado debe ser analizado por el juzgador de amparo tal como fue emitido.

d) Suspensión

Una de las más frecuentes críticas al juicio de amparo es precisamente la paradoja de que la rigidez en su reglamentación impide la paralización de innumerables actos arbitrarios, pero, por otro lado, propicia abusos en la suspensión de los reclamados. Este proyecto pretende establecer un sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, pero que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvían su objetivo natural.

Para tal efecto, se contemplan múltiples reformas al sistema de suspensión en las que, por un lado, se privilegia la discrecionalidad de los jueces, pero por otro, se establecen elementos mínimos formales y sustantivos que deben cumplir las resoluciones suspensivas para facilitar su control a través de los recursos que se prevén en el proyecto.

De acuerdo con el sistema vigente, en los casos en que el órgano jurisdiccional puede de oficio decretar la suspensión del acto reclamado, lo hace de plano; es decir sin procedimiento alguno. Con el proyecto se pretende que las suspensiones de oficio se sigan decretando de plano en los casos de extrema gravedad que son aquéllos que importan peligro de privación de la vida,

incomunicación, deportación, destierro, los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales; pero que se decreten de oficio, con el trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los casos en que se debe suspender un acto debido a que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado y en los amparos contra actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen de propiedad ejidal o comunal.

En cuanto a la suspensión del acto reclamado solicitado por el quejoso, se introduce una figura que se contempla en la reforma constitucional que es la referente a la apariencia de buen derecho. Esta figura, que ya ha sido reconocida por la jurisprudencia, implica un conocimiento preliminar del juzgador con el objeto de resolver acerca de la probable existencia del derecho discutido. El estudio previo que hace el juez tiene sin duda el carácter de provisional, ya que se funda en hipótesis de probabilidad y no en la certeza como sucede en la resolución de fondo. Con esto se lograría una eficaz y pronta protección de los gobernados frente a actos de autoridad arbitrarios y, al tiempo, se

impediría la paralización de actos que en un primer análisis tienen apariencia de constitucionalidad o legalidad.

Asimismo, se estima necesario incorporar nuevos supuestos en los que no procedería el otorgamiento de la suspensión por considerar que, de otorgarse, se seguirían perjuicios al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público como aquéllos en los que se permita el incumplimiento de órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que se trate de órdenes dirigidas a personas que pertenezcan al régimen castrense; cuando la suspensión pueda afectar intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico, y cuando por medio de la suspensión se impida el pago de alimentos.

Si bien en estos casos y en otros que contempla la ley vigente los perjuicios que podría provocar el otorgamiento de la suspensión son muy graves, puede haber ocasiones excepcionales en las que la negativa de la suspensión ocasionaría una mayor afectación al interés social. En tal virtud, se debe dejar la posibilidad al juzgador para que de manera excepcional y

atendiendo al caso concreto, pueda decretar la suspensión en esos casos.

Cabe hacer la aclaración de que los casos que contempla el proyecto como perjudiciales al interés social o contrarios a disposiciones de orden público se establecen, al igual que en el sistema vigente, de manera enunciativa y no limitativa, ya que la enorme gama de posibilidades que puede presentar el orden jurídico y la realidad hacen imposible enumerarlos por completo.

Para que la suspensión cumpla con su fin protector se considera necesario que el órgano jurisdiccional que deba otorgarla no exija al quejoso prueba del interés jurídico o legítimo según corresponda, ya que eso debe ser materia de análisis en el fondo del asunto. La falta de comprobación del interés del quejoso debe traer como consecuencia el sobreseimiento en el juicio, mas no debe ser carga probatoria en el incidente de suspensión, salvo que aduzca ser persona extraña al procedimiento del que emanó el acto reclamado, en cuyo caso sí debe exigírsele que acredite, cuando menos presuntivamente la afectación de ese interés.

Uno de los instrumentos más importantes que pretende otorgarse al órgano jurisdiccional para evitar abusos de la suspensión del acto reclamado, consiste en facultarlo para solicitar documentos y

ordenar las diligencias que considere convenientes con el objeto de contar con mejores elementos para resolver sobre la suspensión definitiva. En el sistema actual, el juez debe resolver únicamente sobre pruebas documentales o de inspección ocular que ofrezcan las partes, pero no tiene posibilidad de allegarse las pruebas que estime pertinentes. Con esta nueva posibilidad será más difícil que los quejosos puedan abusar del juicio de amparo, mediante el ocultamiento de información al juzgador.

Tradicionalmente se ha considerado que el único efecto que puede tener la suspensión es mantener las cosas en el estado que se encuentren, sin embargo paulatinamente se ha cambiado esta concepción y se han introducido efectos restitutorios a las suspensiones del acto reclamado. En esa virtud se considera que un avance importante en esta materia podría significar la propuesta que se hace en el sentido de que, sólo si jurídica o materialmente es posible dicha restitución, el juez podrá decretarla provisionalmente mientras se dicta sentencia en el juicio de amparo.

Ante la cada vez más compleja relación entre la administración pública y los particulares, el juicio de amparo debe prever medios eficaces para contrarrestar los posibles abusos de poder. En la actualidad, diversos servicios que originalmente corresponden al

Estado son prestados por particulares. Ante esta situación se prevén mecanismos para que dichos particulares no obstaculicen los medios de los que dispone el amparo para proteger a los gobernados. Se propone que cuando por mandato expreso de una norma general o acto de autoridad, un particular tuviere o debiere tener intervención en la ejecución del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la ejecución o, en su caso, tome las medidas pertinentes para el cumplimiento de la resolución de suspensión.

En otros casos como en las suspensiones tratándose de amparos contra normas generales o contra actos o resoluciones dictadas en procedimientos de remate, se considera necesario o conveniente precisar los efectos de la medida suspensiva para evitar confusiones. Debe por supuesto destacarse el caso de la suspensión en materia penal, al que se dedica un capítulo específico, en el cual se establecen los distintos efectos de la suspensión dependiendo del acto que se reclame y de la etapa procedimental en que se dicte, como son los casos de deportación, destierro o extradición, órdenes de traslado de un centro penitenciario, y arraigo o prohibición de abandonar demarcación geográfica.

En cuanto a las órdenes de aprehensión, reaprehensión o auto de formal prisión se hace una distinción importante que permitiría el equilibrio del sistema de suspensión cuando se trata de delitos graves. En estos casos, para evitar ficciones innecesarias, se establece expresamente que no procede la suspensión provisional y, excepcionalmente, el juez, atendiendo a características especiales del caso y del quejoso, podrá conceder la suspensión definitiva. En cambio, en delitos no graves, podría proceder tanto la suspensión provisional como la definitiva en cuyo caso el quejoso sería puesto en libertad, bajo las medidas de aseguramiento que determine el juez.

Lo anterior debe considerarse en el entendido de que aún cuando existan reglas específicas para la suspensión en materia penal, el órgano jurisdiccional deberá tener en consideración para su otorgamiento los principios básicos contenidos en las disposiciones generales referentes a la suspensión en los que, entre otras cuestiones se contempla la posibilidad de que se revoque la medida cautelar cuando el quejoso incumpla con cualquiera de las condiciones impuestas.

Cabe señalar que el sistema de suspensión en materia penal que se propone busca que, sin menoscabo de la eficaz persecución de los delitos, el amparo cumpla con su teleología protectora y tenga plena vigencia el principio de presunción de inocencia.

AMPARO DIRECTO

Una preocupación constante de la sociedad consiste en que el Estado proporcione una justicia expedita. El retraso muchas veces se convierte en denegación de justicia. El amparo directo en ocasiones resulta un medio muy lento para obtenerla, en gran medida propiciado por una deficiente utilización del llamado "amparo para efectos". De esta forma, y tomando en cuenta múltiples opiniones en torno a la necesidad de darle mayor concentración a los procesos de amparo directo a fin de evitar dilaciones y abatir la mala práctica del "amparo para efectos", este proyecto propone la adopción de cuatro medidas fundamentales:

La primera consiste en establecer la figura del amparo adhesivo, esto es, dar la posibilidad a la parte que haya obtenido sentencia favorable y a la que tenga interés en que subsista el acto, para promover amparo con el objeto de fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin a juicio

que determinaron el resolutivo favorable a sus intereses o para impugnar algún punto decisorio que les perjudica. Es importante destacar que se pretende que si dichas personas no promueven el amparo adhesivo, precluya su derecho para alegar posteriormente las violaciones que se hayan cometido en su contra.

La segunda y tal vez la más importante, es imponer al quejoso y a quien promueva el amparo adhesivo la carga de invocar en el escrito inicial todas aquellas violaciones procesales que, cometidas en el procedimiento de origen, estimen que puedan violar sus derechos. Al mismo tiempo, imponer la obligación al tribunal colegiado de circuito de amparo de decidir sobre todas las violaciones procesales, incluso las que advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo ni el tribunal las hizo valer de oficio, no procede legalmente que sean materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. Con esta solución habrá de lograrse que en un solo juicio queden resueltas todas las violaciones procesales.

La tercera medida consiste en la imposición a los tribunales colegiados de amparo de la obligación de fijar de manera precisa y clara los efectos de sus sentencias, a fin de que las autoridades responsables puedan cumplir con ellas sin dilación alguna.

Por último, la cuarta consiste en obligar al tribunal colegiado de circuito de amparo a que una vez transcurridos los plazos para que resuelva un asunto, únicamente pueda decidir si éstos se aprueban, se aplazan o se retiran de la lista de la sesión. En estos dos últimos casos, en virtud de la ampliación de plazos que se prevé para lograr una mejor calidad en el estudio de los asuntos, en el acta de la sesión deberá asentarse el nombre del magistrado que hizo la moción de aplazamiento o retiro y la causa que expuso.

En otro orden de ideas, el proyecto propone una novedosa y trascendente modificación en la mecánica del juicio de amparo, a fin de responder a los casos de indefensión derivados de la interposición del recurso en materia contencioso administrativa previsto en el artículo 104, apartado I-B, de la Constitución.

En efecto, tanto la ley vigente como el proyecto permiten al particular acudir directamente al juicio de amparo para impugnar una norma general o agotar los medios de defensa que

establezcan las leyes secundarias. En dichos medios de defensa se pueden hacer valer exclusivamente cuestiones de legalidad; empero, el particular conserva su derecho para plantear lo relativo a la inconstitucionalidad de las normas generales para el caso en que le resulte desfavorable la resolución respectiva. El problema aparece cuando el particular obtiene sentencia favorable en el tribunal contencioso administrativo y la autoridad interpone el recurso de revisión en esta materia, ya que de resultar procedente y fundado el recurso, el gobernado queda en estado de indefensión al estar impedido de plantear los argumentos en contra de la constitucionalidad de las normas generales.

En el proyecto se propone la procedencia del amparo directo contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el sólo efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. Se dispone que, en estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite a trámite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa. Sólo para el caso en que este recurso sea declarado procedente y fundado, el tribunal colegiado de circuito de amparo se avocaría al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas, que de ser resueltas por dicho

tribunal podrían llevarse, en su caso, al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conducto del recurso de revisión en el juicio de amparo.

CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

El cumplimiento de las sentencias de amparo es uno de los temas más importantes de la reforma que se propone. De nada sirve al gobernado contar con una sentencia que lo protege si no puede lograr que se cumpla de manera eficiente.

Para remediar algunas deficiencias que presenta el sistema actual, se proponen medidas coercitivas que se estiman más eficaces para obligar a la autoridad responsable a cumplir con las sentencias de amparo y sanciones importantes ante su incumplimiento. Tal es el caso de la multa que se pretende imponer a la autoridad responsable cuando el órgano jurisdiccional de amparo constata que la sentencia no ha quedado cumplida en el plazo establecido por la ley o no se encuentra en vías de cumplimiento. Asimismo, se ha visto que es ineficaz el sistema de requerimientos al Presidente de la República para que, como superior jerárquico inmediato de la autoridad responsable, le ordene el cumplimiento. Lo anterior debido a la poca claridad con la que este tema está desarrollado en la ley

vigente que ha traído como consecuencia diversidad de criterios de los jueces en cuanto a la forma de notificar al titular del Ejecutivo Federal dicho requerimiento y, en consecuencia la poca eficacia de la medida. En tal virtud, se pretende que en estos casos el requerimiento se haga por conducto del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal quien podrá llevar un control del estricto cumplimiento de las sentencias e informar al Presidente de la República al respecto.

En relación con este tema, se precisa lo que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable como aquél que de conformidad con la normatividad correspondiente, ejerza sobre dicha autoridad poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la ejecutoria o bien para cumplirla por sí misma. Cabe aclarar que dicho superior jerárquico debe referirse en principio al inmediato pues en un sistema como el nuestro en el que los titulares de los poderes ejecutivos ejercen poder o mando sobre todos los servidores públicos de la administración pública correspondiente, parecería absurdo requerirlos ante cualquier incumplimiento, y más bien correspondería requerirlos únicamente cuando se trata de servidores públicos que dependen inmediatamente de ellos.

Por otro lado, se estima necesario incorporar al proyecto los criterios jurisprudenciales que han precisado la forma en la que se considera que la autoridad responsable cumple o incumple con las sentencias. Muchos de esos criterios se han basado en prácticas de la autoridad que parecerían evitar el cumplimiento, por lo que establecerlos en ley daría mayor seguridad a los gobernados. Tal es el caso del criterio que establece que no debe entenderse por cumplida la sentencia si la autoridad lleva a cabo actos que, por su naturaleza estrictamente formal, su escasa trascendencia en la situación del quejoso o su falta de contenido jurídicamente relevante frente al derecho violado, revele la intención de la autoridad de evadir los efectos restitutorios de la sentencia.

Es necesario establecer la obligación que también se contempla en la reforma constitucional sobre todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de una sentencia de amparo, aunque no tengan el carácter de responsables. Dichas autoridades deben realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento.

Por último, se introducen nuevos incidentes en los que se reglamentan de manera específica los supuestos de inconformidad y de cumplimiento sustituto así como los de exceso o defecto en la ejecución de resoluciones de amparo que actualmente es tramitado por medio de la queja. Asimismo se crea el incidente por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme.

El incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, mediante el pago de daños y perjuicios, comprende todas aquéllas formas en las que la autoridad responsable puede resarcir al quejoso por la violación cometida. En la actualidad este incidente procede únicamente a solicitud del quejoso, sin embargo, se pretende reglamentar la posibilidad de que dicho cumplimiento pueda ser decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si el quejoso conviene con la autoridad el cumplimiento sustituto, se considera innecesario remitir el asunto a nuestro máximo tribunal, por lo que el órgano jurisdiccional de amparo que esté conociendo del mismo podrá analizar dicho convenio y resolver lo conducente. Si no hubiere convenio, el cumplimiento sustituto podrá ser decretado por la Suprema Corte de oficio o a solicitud del quejoso.

Debido a los efectos generales de la declaratoria general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme, se estima necesario prever un mecanismo ágil para que el particular, sin tener que promover amparo, pueda impugnar la aplicación de la norma general que se ha declarado inconstitucional o la aplicación en sentido diverso al establecido obligatoriamente por la declaratoria. En esa virtud, se pretende que mediante el incidente de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme cualquier persona pueda acudir ante el juez de distrito que corresponda quien tramitará el asunto en los mismos términos que se tramita la repetición del acto reclamado.

Finalmente, se establece la obligación del órgano jurisdiccional de amparo de suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente en cualquier incidente tendiente al cumplimiento de las sentencias de amparo o de una declaratoria general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme.

JURISPRUDENCIA

Por lo que toca a la jurisprudencia, se consideró prudente mantener una estructura y supuestos generales semejantes a los que prevé la Ley de Amparo vigente, sin embargo se introdujeron

cambios importantes para lograr una mayor eficacia en su obligatoriedad. Tal es el caso del tema relativo a la generalidad e imprecisión que actualmente tiene la jurisprudencia. Debido a que la forma de construcción de las tesis es hoy en día, si puede decirse así, un extracto de los considerandos de una sentencia y ésta última no se publica de manera íntegra ni en ella se alude a los hechos o elementos del caso, se propone que la tesis contenga una relación sucinta de los hechos del asunto del que deriva y la identificación de la norma respecto de la cual haya de fijarse el criterio. Con estas dos adiciones habrá de lograrse, primero, que los órganos competentes precisen las condiciones de interpretación y de aplicabilidad de los criterios que vayan estableciendo y, segundo, que los particulares o autoridades que actúan como partes encuentren formas más adecuadas para definir y formular sus defensas. La precisión de los criterios habrá de producir, entonces, una mayor certeza en la impartición de justicia.

Otra modificación significativa consiste en la reducción de cinco a tres del número de tesis necesarias para constituir jurisprudencia. El cambio no es caprichoso ni se reduce a una mera cuestión numérica. En realidad, de lo que se trata es de encontrar un adecuado equilibrio entre el sistema de precedentes que se sigue en otros ordenamientos o en los procesos de controversias

constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y el de reiteración de criterios que se prevé para la Ley de Amparo. Lo importante es, precisamente, lograr una solución intermedia entre ambos extremos. Esto puede obtenerse disminuyendo el número de los casos a tres a efecto de que los órganos competentes puedan, con mayor facilidad, lograr que sus criterios sean obligatorios para dar certeza a nuestro orden jurídico. Sin embargo, para que la reiteración cumpla con su finalidad, se propone que los criterios deban fijarse al resolver los asuntos en tres sesiones distintas.

En la hipótesis de la jurisprudencia por contradicción de tesis se propone que ésta pueda ser revisada a solicitud de cualquiera de los ministros de la Suprema Corte, con la finalidad de que desaparezcan las llamadas "jurisprudencias congeladas", que trastocan las ventajas de la aplicación jurisdiccional del derecho y que podrían provocar consecuencias indeseadas.

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD O DE INTERPRETACIÓN CONFORME

La declaratoria general de inconstitucionalidad y de interpretación conforme con la Constitución constituyen un tema de indudable importancia y relieve. En primer lugar, cabe destacar que la

declaratoria debe corresponder en exclusiva al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre que la misma hubiere establecido jurisprudencia por reiteración en amparos indirectos en revisión. Es decir, si bien es cierto que a nuestro máximo tribunal se le confiere tan importante atribución, también lo es que sólo se actualiza ante el establecimiento reiterado de un criterio jurisprudencial. La declaratoria de interpretación conforme, por su parte, tiene la ventaja de permitir a la Corte establecer aquella interpretación mediante la cual sea factible salvar la constitucionalidad de la norma impugnada para, de esa forma, garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación de nuestro orden jurídico.

Debido a la trascendencia de las declaratorias acabadas de mencionar, se estima necesario que se hagan de manera separada a las sentencias judiciales. Finalmente, y debido a los alcances de la resolución, se establece que la misma deba ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el *Semanario Judicial de la Federación* y en el órgano oficial de la entidad que, en su caso, hubiere emitido la norma sobre la cual se hubiere hecho tal declaratoria.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

Ya que las sanciones no se encuentran debidamente sistematizadas y agrupadas en la ley vigente, se plantea la posibilidad de satisfacer ambos extremos en un mismo título. Al efecto se pretende compilar en el título respectivo todos los supuestos que pueden traer consigo la aplicación de multas o sanciones penales, los cuales se ordenan y exponen en razón del orden cronológico de los artículos que prevén las hipótesis a sancionar. Asimismo, se pretende establecer los tipos penales para evitar remisiones al Código Penal Federal que crean confusiones en cuanto a la aplicación de las sanciones que correspondan. Por último se adecuan el monto de las multas y se prevén nuevos supuestos penales que se consideran ayudarán a mejorar la impartición de la justicia de amparo.

TRANSITORIOS

El régimen transitorio de una reforma de esta naturaleza merece la mayor atención. En primer lugar, se pretende una *vacatio legis* amplia de seis meses con el objeto de que tanto la ciudadanía como los encargados de aplicar el nuevo juicio de amparo se familiaricen con las nuevas disposiciones. Asimismo, para dar seguridad jurídica a las partes de aquellos juicios que a la entrada

en vigor de la ley se encuentren en trámite, se propone que se seguirán aplicando las disposiciones anteriores, con excepción de lo relativo al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, y el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

El cambio del capítulo de plazos que pretende introducirse impone necesariamente algunas disposiciones transitorias importantes. Debido a que en el proyecto se pretenden introducir plazos para la presentación de la demanda de amparo en supuestos para los que el sistema vigente no contemplaba alguno, es necesario dar oportunidad a las personas que se encuentren en dichos supuestos para acudir al amparo por actos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

Otro tema que tiene repercusión en las disposiciones transitorias es el que se refiere a la jurisprudencia. Con el objeto de no acabar con años de jurisprudencia que pudiera seguir siendo útil para la interpretación de varios conceptos que se retoman en la ley que pretende expedirse, se establece que continúa en vigor toda aquella jurisprudencia que no se oponga a la nueva ley; sin embargo, se precisa que en cuanto a la integración de jurisprudencia por reiteración de criterios no se tomarán en cuenta

las tesis aisladas aprobadas en los asuntos resueltos conforme a la ley anterior.

Asimismo, se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las medidas necesarias para que a la entrada en vigor de la ley se logre el efectivo e inmediato cumplimiento de la misma.

**PROYECTO DE LEY DE AMPARO
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

TÍTULO PRIMERO

Reglas Generales

Capítulo I

Disposiciones Fundamentales

Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales o actos de autoridad que violen las garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los derechos humanos que protegen los instrumentos internacionales generales en la materia, a saber: la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 2º. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de

Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho.

Artículo 3º. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley.

Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo, no causarán contribución alguna.

Capítulo II

Capacidad y Personería

Artículo 4º. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola las garantías o los derechos previstos en el artículo primero y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta, trata de ejecutar u omite el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria;

III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:

a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;

b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;

c) El ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte esa reparación o responsabilidad;

d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el ministerio público;

e) El ministerio público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable, y

IV. El ministerio público federal, en los juicios de amparo contra normas generales.

Artículo 5°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamados en términos del artículo 4° fracción I. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado.

Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.

Artículo 6º. El menor de edad podrá pedir amparo sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional de amparo, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que a juicio del órgano jurisdiccional de amparo justifique la designación de persona diversa.

Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda.

Artículo 7º. La federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que designen las disposiciones que los rijan, cuando la norma general o el acto que reclamen afecte intereses distintos de los que correspondan a sus funciones de autoridad.

Artículo 8º. Las autoridades responsables podrán, por medio de oficio, acreditar delegados que concurren a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones.

El Presidente de la República, a través del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, determinará quién habrá de representarlo en todos los trámites previstos en esta ley. Dicha representación podrá recaer en el propio Consejero Jurídico, en el Procurador General de la República, en los secretarios de estado o en los jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables.

Los gobernadores de los estados, jefe de gobierno del Distrito Federal, procuradores General de la República y de las entidades federativas, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán ser suplidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución.

Artículo 9º. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta ley y, en su caso, por lo que dispongan las normas generales sustantivas aplicables.

Cuando se trate del ministerio público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior.

Artículo 10. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme, bajo protesta de decir verdad, tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas.

En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda indicará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta.

Artículo 11. El quejoso y el tercero interesado podrán nombrar apoderado para que los represente en el juicio, por escrito ratificado ante el órgano jurisdiccional que conozca del mismo, o mediante poder general o especial. Se requerirá cláusula especial para que el apoderado desista del juicio o de los recursos.

Artículo 12. Cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés común, deberán designar de entre ellos un representante; en su defecto, lo hará el órgano jurisdiccional y ordenará su notificación a todos los quejosos.

Artículo 13. Para la admisión de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter, lo que deberá acreditar dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo de admisión. Si no lo acredita, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo lo hará del conocimiento del señalado como quejoso para que en el momento de la diligencia o dentro de los tres días siguientes manifieste si ratifica la demanda, entendiéndose las diligencias directamente con él mientras no señale representante. Si no la ratifica se sobreseerá en el juicio.

Artículo 14. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En este caso, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo abrirá un cuaderno de antecedentes en el que dictará las medidas necesarias para

salvaguardar la integridad física del quejoso y lograr su comparecencia, en la que será requerido para que manifieste si ratifica la demanda de amparo; si lo hace se tramitará el juicio y, en caso contrario, se tendrá por no presentada la demanda.

Si a pesar de las medidas tomadas no se lograre su comparecencia, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio pondrá los hechos en conocimiento del ministerio público federal y, en caso de ser éste la autoridad responsable, lo hará del conocimiento del Procurador General de la República.

Transcurridos tres meses sin que nadie se apersona en el juicio en representación legal del quejoso, se tendrá por no presentada la demanda.

Artículo 15. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión.

Si el fallecido no tiene representación en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de

sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, se ordenará al ministerio público federal que la localice o haga la denuncia correspondiente.

Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto.

Capítulo III

Plazos

Artículo 16. El plazo para presentar la demanda de amparo es de treinta días, salvo:

- I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, en que será de cuarenta y cinco días;
- II. Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal, en que será de dos años calendario;
- III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus

derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual, en que será de dos años calendario, y

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, destierro, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.

Artículo 17. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.

Artículo 18. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, primero de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, primero y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y

veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.

Artículo 19. El juicio puede promoverse en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido.

Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas.

Artículo 20. La presentación de demandas o promociones de término podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes común que habrá de funcionar hasta las doce de la noche.

Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinente para el adecuado despacho de los asuntos.

Artículo 21. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento.

Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva.

Los plazos podrán ampliarse por razón de la distancia, teniendo en cuenta la facilidad o dificultad de las comunicaciones. En ningún caso la ampliación podrá exceder de un día por cada cuarenta kilómetros.

Artículo 22. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina de correos que corresponda al lugar de su residencia, o en la más cercana en caso de no haberla.

CAPITULO IV

NOTIFICACIONES

Artículo 23. Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución.

El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, la cual quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, desistir de las mismas, alegar en las audiencias y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá

acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y se proporcionarán los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización.

Las partes también podrán autorizar sólo para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal.

Artículo 24. La primera notificación al titular del Poder Ejecutivo se entenderá con el Consejero Jurídico. Las subsecuentes notificaciones se harán directamente a los servidores públicos designados en términos del artículo 8º.

Artículo 25. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán:

I. En forma personal:

a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión, salvo que tenga defensor o persona designada para oír notificaciones;

b) El emplazamiento al tercero interesado;

c) Los requerimientos y prevenciones;

- d) La designación de representante común;
- e) El acuerdo por el que se apercibe al quejoso para que ratifique su escrito de desistimiento;
- f) Las sentencias que no sean pronunciadas en la fecha de celebración de la audiencia constitucional;
- g) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional;
- h) Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva cuando no sean dictadas en la fecha de celebración de audiencia incidental;
- i) La aclaración de sentencias definitivas;
- j) La aclaración de las resoluciones que deciden sobre la suspensión definitiva, y
- k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional de amparo lo ameriten;

II. Por oficio:

- a) A la autoridad responsable;
- b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y
- c) Al ministerio público federal en el caso de amparo contra normas generales, y

III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores.

Artículo 26. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas:

I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio:

- a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si

la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha;

b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio correcto y le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, en el que indicará el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y

c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y dará cuenta al órgano jurisdiccional de amparo, quien tomará las medidas necesarias para lograr la notificación personal y, en caso de no ser posible, ordenará que se haga por lista.

En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente;

II. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo lugar en que resida el órgano jurisdiccional de amparo, la primera notificación se hará por exhorto o despacho

en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En el exhorto o despacho se requerirá que se señale domicilio en el lugar del juicio, con apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista.

Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conoce del juicio, pero en zona conurbada, podrá comisionar al notificador para que la realice en los términos de la fracción I de este artículo;

III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto:

a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista;

b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado, el órgano jurisdiccional de amparo dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se

hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen.

Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.

Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional de amparo, se ordenará la publicación correspondiente en el *Diario Oficial de la Federación* sin costo para el quejoso; y

IV. Cuando deba notificarse al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, si no consta en autos el domicilio para oír notificaciones, ni se expresan estos datos en el escrito, la petición será reservada hasta que el interesado llene la omisión, notificándose el trámite por lista.

Artículo 27. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes:

I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, el actuario practicará en aquél la diligencia y asentará la razón en autos.

Si la autoridad se niega a recibirla, se asentará en autos la razón correspondiente y se tendrá por hecha la notificación;

II. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo, el que se agregará en autos.

En casos urgentes, cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, pero en zona conurbada, podrá ordenarse que la notificación se haga por medio del actuario, y

III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la notificación, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo o del incidente de suspensión o de cualquier otro previsto por esta ley, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y II.

Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir, sin costo alguno, los oficios a que se refieren las anteriores fracciones.

Artículo 28. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará en lugar visible y de fácil acceso a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá:

- I. El número del juicio;
- II. El nombre del quejoso;
- III. La autoridad responsable, y
- IV. La síntesis de la resolución que se notifica.

El actuario asentará en el expediente la razón respectiva.

Artículo 29. Las notificaciones surtirán sus efectos:

I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde la hora en que hayan quedado legalmente hechas.

Cuando el oficio de notificación se envíe por correo, el día que conste en el acuse de recibo, siempre y cuando sea un día hábil. En caso contrario, a la primera hora del día hábil siguiente, y

II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación de la lista en los órganos jurisdiccionales de amparo.

Artículo 30. Serán nulas las notificaciones que no se hicieren en la forma que establecen las disposiciones precedentes.

Capítulo V

Competencia

Sección Primera

Reglas de Competencia

Artículo 31. Son competentes para conocer del juicio de amparo:

- I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas;
- II. Los tribunales colegiados de circuito de amparo;
- III. Los tribunales colegiados de circuito de apelación;
- IV. Los juzgados de distrito, y
- V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y de Distrito Federal, en los casos previstos por esta ley.

Artículo 32. Los tribunales colegiados de circuito de amparo son competentes para conocer del juicio de amparo directo.

La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.

En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito de amparo que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito de amparo que primero admita la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma o, en su caso, aquél que primero la hubiere recibido.

Artículo 33. Los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto.

También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo.

Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito de apelación sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de la misma naturaleza, siempre que las resoluciones no constituyan sentencia definitiva o pongan fin al juicio. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado.

Artículo 35. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito que primero admita la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido.

Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad responsable.

Artículo 36. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.

Artículo 37. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado.

En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción a que pertenezca.

Artículo 38. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer la facultad de atracción para conocer de un amparo directo o en revisión, que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito de amparo, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros el pleno acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito de amparo, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción de la solicitud;

II. Recibidos los autos se turnará el asunto al ministro que corresponda, para que dentro del plazo de quince días formule dictamen a efecto de resolver si se ejerce o no dicha facultad, y

III. Transcurrido el plazo anterior el dictamen será discutido por el tribunal pleno dentro de los tres días siguientes.

Si el pleno decide ejercer la facultad de atracción se avocará al conocimiento; en caso contrario, devolverá los autos al tribunal de origen.

El tribunal colegiado de circuito de amparo que corresponda y las partes en un juicio de amparo podrán solicitar a uno o varios ministros que planteen el ejercicio de la facultad de atracción al pleno; los ministros decidirán libremente y sin expresión de causa sobre el particular.

Sección Segunda

Conflictos Competenciales

Artículo 39. Ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior.

Artículo 40. Luego que se suscite una cuestión de competencia, se suspenderá todo procedimiento, con excepción del incidente de suspensión.

Artículo 41. Cuando alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga información de que otra sala está conociendo de cualquier asunto a que aquélla le corresponda, la requerirá para que cese en el conocimiento y le remita los autos.

Dentro del término de tres días, la sala requerida dictará resolución, y si estima que no es competente, remitirá los autos a la requirente. Si considera que es competente hará saber su resolución a la requirente, suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el tribunal pleno resuelva lo que proceda.

Cuando se turne a una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un asunto en materia de amparo y ésta estime que no es competente para conocer de él, lo declarará así y remitirá los autos a la que estime competente. Si esta última considera que tiene competencia, se avocará al conocimiento del asunto; en caso contrario, comunicará su resolución a la sala que se hubiese declarado incompetente y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el tribunal pleno resuelva lo procedente.

Artículo 42. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al correspondiente tribunal colegiado de circuito de amparo.

Si en el mismo supuesto del párrafo anterior quien conoce de la revisión es un tribunal colegiado de circuito de amparo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al conocimiento en la vía directa.

Artículo 43. Cuando se reciba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de amparo, la remitirá con sus anexos al órgano jurisdiccional de amparo que corresponda. El órgano designando conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia, salvo el caso de vía, territorio o especialidad.

Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito de amparo una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo en el caso previsto en el artículo 47; si el órgano designado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia por razón del territorio o especialidad, en términos del artículo 46.

Artículo 44. Cuando un tribunal colegiado de circuito de amparo tenga información de que otro conoce de un asunto que a aquél le corresponda, lo requerirá para que le remita los autos. Si el

requerido estima no ser competente deberá remitir los autos, dentro de los tres días siguientes a la recepción del requerimiento. Si considera que lo es, en igual término hará saber su resolución al requirente, suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo turnará a la sala que corresponda, para que dentro del término de ocho días resuelva lo que proceda.

Cuando el tribunal colegiado de circuito de amparo que conozca de un juicio o recurso estime carecer de competencia para conocer de ellos, lo declarará así y enviará dentro de los tres días siguientes los autos al órgano jurisdiccional que en su concepto lo sea.

Si éste acepta la competencia, se avocará al conocimiento; en caso contrario, dentro de los tres días siguientes comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de ocho días resuelva lo que proceda.

Artículo 45. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de circuito de apelación, en la que se reclamen actos que no sean materia de su competencia por estimar que esos actos son impugnables en

amparo directo, declararán carecer de ella y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito de amparo que corresponda.

El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales colegiados de circuito de apelación.

Si la competencia del tribunal colegiado de circuito de amparo aparece del informe previo o justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal colegiado de circuito de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta provea lo relativo a la suspensión del acto reclamado.

Artículo 46. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o de un tribunal colegiado de circuito de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de aquellos actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales.

Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito de amparo, remitirá los autos al

tribunal colegiado de circuito de amparo de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente.

Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito de amparo, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior.

Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito de amparo tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio, comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente.

Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.

Artículo 47. Cuando el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito de apelación ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un

juicio diverso promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio.

Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos.

En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 46.

Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante el juez de distrito que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el otro juicio.

Artículo 48. Cuando alguna de las partes estime que un juez de distrito o tribunal colegiado de circuito de apelación está conociendo de un juicio de amparo que debe tramitarse como directo, podrá ocurrir ante el tribunal colegiado de amparo que

estime competente y exhibir copia de la demanda y de las constancias conducentes.

El presidente pedirá informe al juez de distrito o tribunal colegiado de circuito de apelación, que deberá rendirse en el plazo de veinticuatro horas, y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Capítulo VI

Impedimentos, Excusas y Recusaciones

Artículo 49. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:

I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo;

II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;

III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo;

IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación;

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada;

VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y

VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes.

Artículo 50. En materia de amparo sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior.

Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos.

Artículo 51. El servidor público que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión, excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto. En este supuesto, el servidor público que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento.

Artículo 52. Conocerán de las excusas y recusaciones:

- I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de su competencia;
- II. La sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los asuntos de su competencia, así como en el supuesto del artículo 54;
- III. Los tribunales colegiados de circuito de amparo:

a) De uno de sus magistrados;

b) De dos o más de los magistrados de otro tribunal colegiado de circuito de amparo;

c) De los jueces de distrito y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo, que se encuentren en su circuito, y

IV. Los tribunales colegiados de circuito de apelación:

a) De uno de sus magistrados, y

b) De dos o más de los magistrados de otro tribunal colegiado de circuito de apelación.

Artículo 53. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate.

Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado que corresponda.

Las excusas se calificarán de plano.

Artículo 54. Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate quien presida tendrá voto de calidad.

Cuando se manifiesten impedidos dos o más ministros de una de las salas, se calificarán las excusas por otra sala. Si las admiten, se pedirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia la designación de los ministros que se requieran para que la primera pueda funcionar válidamente.

Artículo 55. Cuando uno de los integrantes de un tribunal colegiado de circuito se excuse o sea recusado, los restantes resolverán lo conducente.

En caso de empate, la resolución corresponderá al tribunal colegiado de circuito de amparo o de apelación siguiente en orden del mismo circuito y especialidad y, de no haberlos, al del circuito más cercano.

Cuando la excusa o recusación se refiera a más de un magistrado, la resolución se hará en términos del párrafo anterior.

Si sólo es fundada la excusa o recusación de uno de los magistrados, el asunto se devolverá al tribunal de origen para que resuelva. Si fueren dos o más los magistrados que resulten impedidos, el propio tribunal que así lo decidió resolverá el asunto principal.

Artículo 56. Cuando se declare impedido a un juez de distrito, el conocimiento del asunto corresponderá a otro del mismo distrito y, en su caso, especialización; en su defecto, conocerá el más próximo perteneciente al mismo circuito.

Artículo 57. En el escrito de recusación deberán manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan y exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada. De no cumplirse estos requisitos la recusación se desechará de plano, salvo que, por lo que hace al último de ellos, se alegue insolvencia. En este caso, el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir garantía por el importe del mínimo de la multa o exentar de su exhibición.

Artículo 58. La recusación se presentará ante el servidor público a quien se estime impedido, éste lo comunicará al órgano que deba calificarla. Éste, en su caso, la admitirá y solicitará informe al servidor público requerido, el que deberá rendirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación.

Si el servidor público admite la causa de recusación, se declarará fundada; si la negare, se señalará día y hora para que dentro de los tres días siguientes se celebre la audiencia en la que se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas de las partes y se dictará resolución.

En caso de no rendirse el informe a que se refiere el párrafo primero, se declarará fundada la causa de recusación, en cuyo caso se devolverá al promovente la garantía exhibida.

Capítulo VII

Improcedencia

Artículo 59. El juicio de amparo es improcedente:

I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

II. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, salvo los que afecten derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación;

III. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

IV. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito de amparo;

V. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso de la Unión o de sus Cámaras en materia de declaratoria de procedencia o de juicio político a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, será procedente en contra de resoluciones y acuerdos dictados en el procedimiento, siempre que se afecten gravemente las defensas del quejoso;

VI. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme, en términos de lo dispuesto por el capítulo IV del título cuarto;

VII. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;

VIII. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales;

IX. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;

X. Contra actos que no causen agravio al quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación para causarlo;

XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;

XII. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnabile en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nùlificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;

XIII. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral;

XIV. Contra actos consumados de modo irreparable;

XV. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso,

una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;

XVI. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Se exceptúa de lo anterior:

a) Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales;

b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de formal prisión o de sujeción a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o

cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y

c) Cuando se trate de terceros extraños al procedimiento;

XVII. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;

XVIII. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia;

XIX. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;

XX. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y

XXI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley.

Artículo 60. Las causas de improcedencia son de aplicación estricta, deberán quedar probadas plenamente y se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

Capítulo VIII

Sobreseimiento

Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

- I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca esta consecuencia. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido de que de no hacerlo, se le tendrá por desistido;
- II. El quejoso no acredite haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 26;
- III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona;
- IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y
- V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

Artículo 62. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser, posible acompañarán las constancias que la acrediten.

Artículo 63. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo.

Capítulo IX

Incidentes

Artículo 64. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia.

Artículo 65. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento.

Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente.

Sección Primera

Nulidad de Notificaciones

Artículo 66. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan.

Este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el procedimiento.

Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano.

Artículo 67. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada.

Sección Segunda

Reposición de Constancias de Autos

Artículo 68. El incidente de reposición de constancias de autos se tramitará a petición de parte o de oficio, en ambos casos, se certificará su preexistencia y falta posterior.

Artículo 69. El órgano jurisdiccional requerirá a las partes para que dentro del plazo de cinco días, aporten las copias de las constancias y documentos relativos al expediente que obren en su poder. En caso necesario, este plazo podrá ampliarse por otros cinco días.

Artículo 70. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, se citará a las partes a una audiencia, que se celebrará dentro de los tres días siguientes, en la que se hará relación de las constancias que se hayan recabado, se oirán los alegatos y se dictará la resolución que corresponda.

Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición ocasionen, sin perjuicio de las sanciones penales que ello implique.

Capítulo X

Sentencias

Artículo 71. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la norma general o acto que la motivare.

Cuando proceda hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad se aplicarán las disposiciones del Título Cuarto.

En amparo directo, la calificación de los conceptos de violación en que se alegue la inconstitucionalidad de una norma general, se hará únicamente en la parte considerativa de la sentencia.

Artículo 72. La sentencia debe contener:

- I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;
- II. El análisis de los conceptos de violación o en su caso de los agravios;
- III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;
- IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer; y
- V. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda, niegue o sobresea el amparo, en congruencia con la parte considerativa.

El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio o a petición de parte, podrá aclarar la sentencia dentro de los tres días siguientes a su notificación.

Artículo 73. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas distintas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante dicha autoridad.

El órgano jurisdiccional de amparo deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.

Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán

recabarse de oficio las pruebas y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

Artículo 74. El órgano jurisdiccional de amparo, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.

Artículo 75. Los efectos de la sentencia que concede el amparo serán:

- I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y
- II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo para efectos, el juzgador debe precisarlos, para su estricto cumplimiento.

En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de formal prisión en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión.

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, si se trata de delito considerado como grave, excepcionalmente, de acuerdo con las circunstancias del caso, el órgano jurisdiccional de amparo podrá determinar que la sentencia que conceda el amparo surta efectos inmediatos.

En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia.

Artículo 76. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá decidir si es constitucional; si puede considerarse conforme con la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos al aplicarse según una determinada interpretación, o si debe considerarse inconstitucional.

En el último supuesto se declarará la invalidez de la norma general impugnada y los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada.

Artículo 77. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes:

I. En favor de los menores o incapaces;

II. En materia penal,

a) En favor del reo, y

b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso;

III. En materia agraria:

a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 16 de la ley, y

b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios;

IV. En materia laboral, en favor del trabajador, y

V. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1º. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada.

En los casos de las fracciones I, II y III la suplencia se dará aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

Capítulo XI

Medios de Impugnación

Artículo 78. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación.

Sección Primera

Recurso de Revisión

Artículo 79. Procede el recurso de revisión:

- I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:
 - a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental;
 - b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente;
 - c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos;
 - d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, y

e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia.

II. En amparo directo, en contra de las resoluciones siguientes:

a) Las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su presidente, en cumplimiento de acuerdos generales respectivos.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras, y

b) Las de los tribunales colegiados de circuito de amparo que decidan sobre el exceso o defecto en la ejecución de una sentencia de amparo directo dictada por ellos mismos, o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en revisión, siempre que en ella se hubiese declarado la inconstitucionalidad de una norma

general o determinado la interpretación directa de un precepto constitucional.

Artículo 80. La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por la contraria dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes. Su presentación se hará ante el órgano jurisdiccional que admitió el recurso y el trámite se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto en esta sección para la revisión principal, y seguirá la suerte procesal de ésta.

Los agravios en la revisión adhesiva pueden fortalecer las consideraciones de la sentencia que orientaron el resolutivo favorable al recurrente, o impugnar las que concluyen en un punto decisorio que le perjudica.

Artículo 81. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

I. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas

inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad; y

II. Contra las sentencias dictadas por un tribunal colegiado de circuito de amparo, en los casos a que se refiere la fracción II del artículo 79.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales colegiados de circuito de amparo los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine.

Artículo 82. Son competentes los tribunales colegiados de circuito de amparo para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno.

Artículo 83. Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en revisión, por sus características especiales deba ser de su conocimiento, lo atraerá oficiosamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 38.

Artículo 84. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional de amparo que conozca del juicio.

La interposición del recurso en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia o ante el tribunal colegiado de circuito de amparo, no interrumpirá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, salvo que en lo relativo al tribunal colegiado de circuito de amparo se esté en los supuestos de la fracción II del artículo 79.

Artículo 85. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto reclamado de cada una de ellas; pero tratándose de amparo contra normas generales, los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su promulgación o publicación podrán interponer en todo caso el recurso.

Tratándose de actos jurisdiccionales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, sólo podrán interponerlo quienes tengan el carácter de parte en el juicio o procedimiento del que deriva la resolución o el acto reclamado.

Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada, debiendo exhibirse copias para el expediente y para cada una de las partes.

Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia.

Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el primer párrafo, se requerirá al recurrente para que en el plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se afecte al recurrente por actos restrictivos de la libertad, cuando se trate de menores o de incapaces, o se afecten derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual, en los que el órgano jurisdiccional de amparo expedirá las copias correspondientes.

Artículo 87. Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de agravios, el órgano jurisdiccional por conducto del cual se hubiere presentado las distribuirá entre las partes y remitirá el original con el expediente dentro del plazo de tres días a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al tribunal colegiado de circuito de amparo, según corresponda.

Artículo 88. Tratándose de resoluciones relativas a la suspensión definitiva, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse dentro del plazo de tres días, quedando su duplicado ante el órgano jurisdiccional en contra de cuya resolución se interpuso el recurso.

Artículo 89. El presidente del órgano jurisdiccional de amparo, según corresponda, dentro de los tres siguientes días a su recepción calificará la procedencia del recurso y lo admitirá o desechará.

Artículo 90. Notificadas las partes del auto de admisión, transcurrido el plazo para adherirse a la revisión y, en su caso, tramitada ésta, se turnará de inmediato el expediente al ministro o magistrado que corresponda. La resolución deberá dictarse dentro del plazo máximo de noventa días.

Artículo 91. Al conocer de los asuntos en revisión en contra de sentencias dictadas en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional de amparo, observará las reglas siguientes:

I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.

Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada;

II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; si son fundados se revocará la resolución recurrida;

III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la operancia de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia;

IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento;

V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y concederá el amparo;

VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo; y

VII. Sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquéllas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional.

Artículo 92. En la revisión adhesiva el estudio de los agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo anterior.

Artículo 93. Cuando en la revisión concurren materias que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia y de un tribunal colegiado de circuito de amparo, el asunto se remitirá a aquélla, la que resolverá exclusivamente en cuanto corresponda a su competencia, dejando a salvo, en su caso, la del tribunal colegiado de circuito.

Artículo 94. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por tribunales colegiados, la Suprema Corte de Justicia resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma general impugnada, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sección Segunda

Recurso de Queja

Artículo 95. El recurso de queja procede:

- I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
 - a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación;

- b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional;
- c) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado;
- d) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;
- e) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios,
- f) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso;
- g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, y

h) Las que decidan sobre el cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo, y

II. En amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos:

a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente;

b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehuse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;

c) Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios; y

d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados.

Artículo 96. El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones siguientes:

I. De veinticuatro horas, cuando se trate de suspensión de plano o provisional, y

II. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo.

Artículo 97. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante la autoridad que conozca del juicio de amparo.

En el caso de que se trate de actos de la autoridad responsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio.

Artículo 98. En el escrito de queja se expresarán los agravios que cause la resolución recurrida; se anexará copia para cada una de las partes y se señalarán las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso.

Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior se requerirá al recurrente para que en el plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se trate de actos restrictivos de la libertad o

que afecten intereses de menores o de incapaces, o derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual, en los que el órgano jurisdiccional de amparo expedirá las copias correspondientes.

Artículo 99. El órgano jurisdiccional de amparo notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver. Transcurrido el plazo, enviará el escrito del recurso, copia de la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que estime pertinentes.

En los supuestos del artículo 95, fracción I, inciso b) el órgano jurisdiccional de amparo notificará a las partes y de inmediato remitirá al que corresponda, copia de la resolución, el informe materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes.

Cuando se trate de actos de la autoridad responsable, el órgano jurisdiccional de amparo requerirá a dicha autoridad, el informe materia de la queja, en su caso la resolución impugnada, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes.

La falta o deficiencia de los informes establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos.

Recibidas las constancias, se dictará resolución dentro de los cuarenta días siguientes, o dentro de las cuarenta y ocho horas en los casos del artículo 95, fracción I, inciso b).

Artículo 100. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación está facultado para suspender el procedimiento, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia.

Artículo 101. En caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío; salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento, en que dejará sin efecto la resolución recurrida y ordenará al que la hubiere emitido dictar otra, debiendo precisar los efectos concretos a que deba sujetarse su cumplimiento.

Sección Tercera

Recurso de Reclamación

Artículo 102. Procede el recurso de reclamación contra los acuerdos dictados en el juicio de amparo por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito.

Dicho recurso podrá interponerse dentro del plazo de tres días por cualquiera de las partes, ante el órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto, expresando agravios.

Artículo 103. En el recurso de reclamación sólo podrán ofrecerse las pruebas documental y pericial. El recurrente deberá hacerlo en el escrito en que interpone el recurso y las demás partes en el plazo de tres días siguientes al de aquél en que surta sus efectos la notificación del auto admisorio.

Artículo 104. El órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto, resolverá en un plazo máximo de diez días; el ponente será un ministro o magistrado distinto de su presidente.

Artículo 105. La reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiere emitido a dictar el que corresponda.

TÍTULO SEGUNDO

De los Procedimientos de Amparo

Capítulo I

El Amparo Indirecto

Sección Primera

Procedencia y Demanda

Artículo 106. El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:

a) Las derivadas de un procedimiento de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo en cuanto se reclamen vicios en dicho procedimiento;

b) Los tratados internacionales;

c) Las leyes federales;

d) Las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

e) Las leyes de los estados y del Distrito Federal;

f) Los reglamentos federales;

g) Los reglamentos locales; y

h) Los decretos y acuerdos de observancia general.

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de éstas últimas hubiere quedado total o parcialmente sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten derechos sustantivos, decidan sobre presupuestos procesales o constituyan violaciones relevantes del procedimiento;

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones

cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.

En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten derechos sustantivos, decidan sobre presupuestos procesales o constituyan violaciones relevantes de procedimiento;

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;

VII. Contra las resoluciones que en definitiva impliquen el no ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público, y

VIII. Contra las promociones de desistimiento de la acción penal presentadas por el ministerio público y el auto que les recaiga.

Artículo 107. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito, en la que se expresará:

- I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;
- II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;
- III. La autoridad responsable. En el caso de que se impugnen normas generales, se incluirá a las que las hubieren promulgado o publicado;
- IV. La norma general o acto que de cada autoridad se reclame;
- V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;
- VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1°, contengan las garantías o derechos cuya violación se reclame, y
- VII. Los conceptos de violación.

Artículo 108. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 14 de esta ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese:

- I. El acto reclamado;
- II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible;
- III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto, y
- IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso.

En estos supuestos la demanda podrá formularse por comparecencia o conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 19.

Artículo 109. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio.

El órgano jurisdiccional mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia o por vía telegráfica, o la suspensión proceda de oficio y no se hubiere solicitado.

Artículo 110. Podrá ampliarse la demanda cuando:

- I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;
- II. Del informe con justificación aparezcan datos que no eran conocidos por el quejoso, en cuyo caso, el plazo de presentación será de quince días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del informe; y
- III. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 16.

En los casos de las fracciones II y III, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional, o presentar una nueva demanda.

Sección Segunda

Substanciación

Artículo 111. Dentro del plazo de tres días contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso turnada, el órgano jurisdiccional de amparo deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artículos 14 y 19 deberá proveerse de inmediato.

Artículo 112. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.

Artículo 113. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:

I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;

II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 107;

III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;

IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado, y

V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.

Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada.

Artículo 114. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional de amparo admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los cuarenta días siguientes, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y, en su caso, ordenará la tramitación del incidente de suspensión.

Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días.

Artículo 115. Al pedirse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al requerir el informe previo.

Al tercero interesado se le entregará copia de la demanda al notificársele del juicio. Si reside fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo se le notificará por medio de exhorto o despacho o, en caso de residir en zona conurbada, podrá hacerse por conducto del actuario.

Artículo 116. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional de amparo, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.

Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.

Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero no serán tomados en cuenta. Además, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos a que se refiere el artículo 1°.

En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.

No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso.

Artículo 117. Serán admisibles toda clase de pruebas excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional salvo que esta ley disponga otra cosa.

La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

Las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial deberán ofrecerse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, del cuestionario para los peritos o de los puntos sobre que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

Estas pruebas sólo serán tomadas en cuenta en el principal.

Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba.

El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia.

Artículo 118. Al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional de amparo o rinda dictamen por separado, designación que deberá hacer dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del auto admisorio de la prueba.

Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el órgano jurisdiccional de amparo deberá excusarse de dictaminar cuando exista alguna de las causas de impedimento a que se refiere el artículo 49. Al aceptar su nombramiento manifestará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en la hipótesis de esos impedimentos.

Artículo 119. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen obligación de expedirles, con toda oportunidad, las copias o documentos que aquéllas les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada, una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional de amparo que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia, y hará el requerimiento de que se le envíen directamente a él los documentos o copias, dentro de un plazo que no exceda de diez días.

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional de amparo, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen, hará uso de los medios de apremio y consignará, en su caso, a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes.

Artículo 120. Si al presentarse un documento con anterioridad a la audiencia alguna de las partes lo considera falso, podrá impugnarlo incidentalmente en un plazo de tres días. Si la objeción se hiciere en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional de amparo la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 117, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia.

Artículo 121. Las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, salvo aquellas que a juicio del órgano jurisdiccional puedan recibirse con anterioridad o las que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional que conoce del amparo, vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal.

Artículo 122. Las partes podrán comparecer a la audiencia si lo estiman pertinente. Abierta la misma, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito

que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

Sección Tercera

Suspensión del Acto Reclamado

Primera Parte

Reglas Generales

Artículo 123. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso.

Artículo 124. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales.

En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

Artículo 125. La suspensión procederá de oficio y se sujetará al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos:

I. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, y

II. Cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen de propiedad ejidal o comunal.

Artículo 126. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurren los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el quejoso;

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y

III. Que de permitirlo la naturaleza del caso, opere en favor del quejoso la apariencia de buen derecho.

La suspensión se tramitará en incidente por separado y duplicado.

Artículo 127. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio;

II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;

III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;

V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;

VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;

VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;

VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;

IX. Se impida el pago de alimentos, y

X. En los demás casos análogos a los expresamente citados.

El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio, con la negativa de la medida suspensiva pueda causarse mayor afectación al interés social.

Artículo 128. Cuando al presentarse la demanda no se haya solicitado la suspensión, se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.

Artículo 129. Para conceder la suspensión no se exigirá al quejoso prueba del interés jurídico o del interés legítimo a que se refiere el artículo 4o., fracción I, salvo que se trate de persona extraña al procedimiento del que emanó el acto reclamado, en cuyo caso será necesario que acredite, cuando menos presuntivamente, la afectación a esos intereses.

Artículo 130. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

Artículo 131. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños

y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo, cuando la garantía se hubiere fijado discrecionalmente o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Artículo 132. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior, deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá:

- I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía;
- II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y
- III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito.

Artículo 133. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

El órgano jurisdiccional de amparo está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos:

- I. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y
- II. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

Artículo 134. La suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido.

Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada. El órgano jurisdiccional de amparo dictará el acuerdo al vencimiento del plazo y lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado; no obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensiva.

Artículo 135. Sólo la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta ley exige.

En los casos a que se refiere el artículo 125, fracción II, no se requerirá de garantía para que surta efectos la suspensión.

Artículo 136. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional acordará lo siguiente:

I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda.

Artículo 137. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 126, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional de amparo, con la sola presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.

Artículo 138. En el informe previo la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la

suspensión y aquéllas que permitan al órgano jurisdiccional de amparo establecer el monto de las garantías correspondientes. Las partes podrán objetar su contenido en la audiencia.

En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones.

Artículo 139. Cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo, y no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso de los medios a que se refiere el artículo anterior, se celebrará la audiencia incidental respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas. La resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes.

Artículo 140. En ningún caso se admitirá el informe previo que se rinda fuera del plazo concedido.

La falta de informe hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.

Artículo 141. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.

En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial. Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 14, será admisible la prueba testimonial. Estas pruebas sólo serán tomadas en cuenta en el incidente.

Para efectos de este artículo, no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal.

Artículo 142. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos; se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que estará sujeta.

Artículo 143. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión.

Artículo 144. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener:

- I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados;
- II. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;
- III. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión. Cuando la naturaleza del caso lo permita, deberá realizar un análisis ponderado entre los requisitos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 126, y
- IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la suspensión, en congruencia con la parte considerativa. Si se concede, deberán precisarse los efectos para su estricto cumplimiento.

Artículo 145. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional de amparo deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensiva siga surtiendo efectos.

Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restituirá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

El órgano jurisdiccional de amparo, tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.

Artículo 146. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso.

En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.

Artículo 147. Cuando por mandato expreso de una norma general o de alguna autoridad, un particular tuviere o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la ejecución, efectos o consecuencias de dicho acto o, en su caso, que tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensiva.

Artículo 148. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en el asunto que haya motivado el acto reclamado, a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, o sin materia al juicio de amparo.

Artículo 149. Cuando se promueva el amparo contra actos o resoluciones dictadas en un procedimiento de remate de inmuebles, la suspensión permitirá el curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega de los bienes al adjudicatario.

Tratándose de bienes muebles, el efecto de la suspensión será el de impedir su entrega material al adjudicatario.

Artículo 150. Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral, la suspensión se concederá en forma tal que no se ponga a la parte trabajadora, si obtuvo laudo favorable, en peligro de no poder subsistir, mientras se resuelva el juicio de amparo, por lo cual sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

Artículo 151. La resolución en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aunque se interponga recurso o se promueva el incidente de modificación o revocación; pero si con motivo del recurso o del incidente se concede, sus efectos se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria correspondiente, siempre que la naturaleza del acto lo permita.

Artículo 152. La suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión.

Se considerará hecho superveniente, entre otros, la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido del informe previo.

En el caso, en que la suspensión se hubiere negado respecto de actos de aplicación de una norma general, el quejoso podrá promover la revocación o modificación de la resolución correspondiente, a efecto de que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo esté en aptitud de suspender o no el acto superveniente y, en su caso, establecer las condiciones y requisitos para que dicha suspensión surta sus efectos.

Artículo 153. Cuando se interponga recurso contra resoluciones dictadas en el incidente de suspensión, se remitirá el original al tribunal colegiado de circuito de amparo competente y se dejará el duplicado en poder del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sin perjuicio de que se siga actuando en el duplicado.

Artículo 154. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente.

Artículo 155. En lo conducente, se aplicará al auto que resuelve sobre la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que decide sobre la suspensión definitiva.

Artículo 156. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas a la ejecución de las sentencias de amparo.

Segunda Parte

En Materia Penal

Artículo 157. En los lugares donde no resida juez de distrito y se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas:

- I. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se mande suspender; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución;
- II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del ministerio

público al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo,
y

III. Remitir el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, en tanto el juez le acusa recibo de aquéllas.

Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional más próximo.

Artículo 158. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, destierro o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal.

Artículo 159. Cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspensión tendrá por efecto que éste no se lleve a cabo.

Artículo 160. Cuando el acto reclamado consista en la orden de arraigo o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin autorización judicial, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad que solicitó el arraigo y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigido.

En los actos a que se refiere el párrafo anterior, si se trata de delito considerado como grave, no procede la suspensión provisional. Excepcionalmente, de acuerdo con las circunstancias del caso, podrá concederse la suspensión definitiva.

De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que el arraigo se ejecute en el domicilio del quejoso.

Artículo 161. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo,

sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento.

Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del ministerio público.

Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad.

Artículo 163. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del ministerio público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, o de noventa y seis tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente.

Cuando el quejoso se encuentre a disposición del ministerio público por haber sido detenido en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición.

En cualquier caso distinto de los anteriores en los que el ministerio público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad.

Artículo 164. Cuando la privación de la libertad se lleve a cabo por virtud de orden de aprehensión, reaprehensión o auto de formal prisión, dictados por autoridad competente por delito que no sea considerado como grave, procederá la suspensión provisional y la definitiva.

En los actos a que se refiere el párrafo anterior, si se trata de delito considerado como grave, no procede la suspensión provisional. Excepcionalmente, de acuerdo con las circunstancias del caso, podrá concederse la suspensión definitiva.

El efecto de la suspensión consistirá en que el quejoso sea puesto en libertad, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia, quede sujeto al proceso penal para

los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable para la continuación de la causa, en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.

Artículo 165. La libertad otorgada al quejoso con motivo de una resolución suspensiva podrá ser revocada cuando éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas por el órgano jurisdiccional de amparo o derivadas del procedimiento penal respectivo.

Artículo 166. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que estime convenientes.

Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta:

- I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute;
- II. Las características personales y situación económica del quejoso, y

III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia.

No se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 161.

Artículo 167. Cuando haya temor fundado de que la autoridad responsable trate de burlar la orden de libertad del quejoso o de ocultarlo, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacerlo comparecer ante él a través de los medios que estime pertinente o trasladarse al lugar de su detención para ponerlo en libertad. Para tal efecto las autoridades civiles y militares estarán obligadas a brindar el auxilio necesario al órgano jurisdiccional de amparo.

Capítulo II

El Amparo Directo

Sección Primera

Procedencia

Artículo 168. El juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.

Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con la consignación ante el órgano jurisdiccional, y

II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el sólo efecto de

hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.

En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito de amparo resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.

Artículo 169. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva.

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia.

Artículo 170. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:

I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;

II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate;

III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;

IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;

V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;

VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley;

VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;

VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos;

IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión;

X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello, y

XI. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.

Artículo 171. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:

I. No se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre de las personas que declaren en su contra;

II. No se le permita nombrar defensor en la forma que determine la ley, o si no tiene quien lo defienda, no se le haga saber el nombre del defensor público o de oficio que corresponda; no se le permita hacer saber su nombramiento al defensor designado o se le impida comunicarse con él o bien que éste lo asista en alguna diligencia del proceso o habiéndose negado a nombrar defensor, no se le nombre al público o al de oficio;

III. No se le nombre intérprete si no habla o no entiende suficientemente el idioma castellano o es sordomudo;

IV. Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia del juez, con los testigos que declararon en su contra;

V. El juez actúe sin secretario o sin testigos de asistencia, o se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley;

VI. No se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o se haga en forma contraria a la ley, siempre que por ello no comparezca; no se le admita en el acto de la diligencia, o se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga;

VII. No se le reciban las pruebas que legalmente ofrezca o no se reciban con arreglo a la ley;

VIII. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión;

IX. No se le proporcionen los datos necesarios para su defensa;

X. Se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia de su defensor o sin la del juez que deba resolver, del secretario o testigos que deban autorizar el acto;

XI. No se celebre la audiencia pública a que se refiere el artículo 20, apartado A fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que deba ser oído en defensa para que se le juzgue;

XII. Debiendo ser juzgado por un jurado, no se integre en los términos previstos en la ley, o se le juzgue por otro tribunal;

XIII. Se sometan a la decisión del jurado cuestiones de índole distinta a las señaladas por la ley;

XIV. La sentencia se funde en la confesión del acusado, si estuvo incomunicado antes de rendirla, o si se obtuvo por medio de amenazas o de cualquier otra coacción;

XV. La sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente;

XVI. Sea condenado por diverso delito al determinado en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso.

No se considerará que el delito es diverso, cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que, en este último caso, el ministerio público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y haya sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio, y

XVII. Cuando se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo.

Artículo 172. En la demanda de amparo el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.

El tribunal colegiado de circuito de amparo, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja.

Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

Sección Segunda

Demanda

Artículo 173. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán:

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;

II. El nombre y domicilio del tercero interesado;

III. La autoridad responsable;

IV. El acto reclamado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia;

V. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquélla en que hubiese tenido conocimiento del mismo;

VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1°, contengan las garantías o derechos cuya violación se reclame, y

VII. Los conceptos de violación.

Artículo 174. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes.

La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta ley.

Artículo 175. Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable prevendrá al promovente para que lo haga dentro del plazo de cinco días. Transcurrido éste sin que se haya subsanado la omisión, remitirá la demanda con el informe relativo al tribunal colegiado de circuito de amparo, cuyo presidente la tendrá por no presentada. Si el presidente determina que no existe incumplimiento, o que éste no es imputable al quejoso, devolverá los autos a la autoridad responsable para que siga el trámite que corresponda.

La autoridad responsable, de oficio, mandará sacar las copias en asuntos del orden penal; cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces; así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros.

Artículo 176. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá:

I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas.

Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente;

II. Emplazar al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso, y

III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de emplazamiento a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la

ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión.

Sección Tercera

Substanciación

Artículo 177. El presidente del tribunal colegiado de circuito de amparo, deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Artículo 178. Si hubiera irregularidades en el escrito de demanda, por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 173, el presidente del tribunal colegiado de circuito de amparo señalará al promovente un plazo que no excederá de cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa.

Si el quejoso no cumple el requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable.

Artículo 179. Si el presidente del tribunal colegiado de circuito de amparo no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de quince días presenten sus alegatos o la demanda de amparo adhesivo.

Artículo 180. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente. La presentación y trámite de aquél se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal.

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo, podrán estar encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a sus intereses, o impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo.

La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones que se hayan cometido en su contra.

Artículo 181. Transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 179, dentro de los tres días siguientes el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución, dentro de los noventa días siguientes. El auto de turno hace las veces de citación para sentencia.

Artículo 182. La lista de los asuntos que deban verse en cada sesión se publicará en los estrados del tribunal cuando menos tres días antes de la celebración de ésta, sin contar el de la publicación ni el de la sesión.

Los asuntos se discutirán en el orden en que se listen, salvo casos de excepción a juicio del órgano jurisdiccional. Si fueran aprobados se procederá a la firma del engrose dentro de los diez días siguientes.

De no ser aprobados, los asuntos sólo se podrán aplazar o retirar. En estos supuestos, se asentará a petición de quien y la causa que expuso. El asunto deberá listarse dentro de un plazo que no excederá de treinta días naturales.

Artículo 183. El día señalado para la sesión, el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de resolución; el presidente pondrá a discusión cada asunto; se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados, y, estando suficientemente debatido, se procederá a la votación; acto continuo, el presidente hará la declaración que corresponda y el secretario publicará la lista en los estrados del tribunal.

Artículo 184. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último caso, el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de diez días siguientes al de la firma del engrose, voto en el que expresará la razones que lo fundamentan.

Artículo 185. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión.

Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la sentencia.

En ambos casos el plazo para redactar la sentencia será de diez días.

Artículo 186. Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus integrantes y por el secretario de acuerdos, salvo causa de fuerza mayor. Firmada la sentencia se notificará por lista al día siguiente.

Artículo 187. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica.

En los asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del quejoso, se le dará preferencia al estudio de aquéllas.

Sección Cuarta

Suspensión del Acto Reclamado

Artículo 188. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

En materia laboral, la suspensión la decidirá el presidente de la junta o tribunal respectivo, y procederá siempre que no ponga en riesgo la subsistencia del trabajador.

Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 123, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134 y 154.

Artículo 189. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable, la cual deberá ponerlo en libertad caucional si la solicita y ésta procede.

TÍTULO TERCERO

Cumplimiento y Ejecución

Capítulo I

Cumplimiento e Inejecución

Artículo 190. Cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el órgano jurisdiccional de amparo de primera o única instancia, según corresponda, la notificará sin demora a la autoridad responsable para su cumplimiento y a las demás partes para su conocimiento y efectos legales conducentes.

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse el cumplimiento de la ejecutoria por los medios oficiales de que dispongan las oficinas públicas de comunicaciones, o que existan en el propio órgano, de modo que su cumplimiento se logre de inmediato, sin perjuicio de comunicarla íntegramente por oficio.

En el oficio o medio de comunicación empleado, se prevendrá a las autoridades responsables que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia dentro del plazo de veinticuatro horas, si se trata de asuntos a los que se refiere el párrafo anterior, y de tres días en los restantes.

Artículo 191. Si la sentencia no quedare cumplida en el plazo a que se refiere el artículo anterior, cuando la naturaleza del acto lo permita o, en caso contrario, no se encontrare en vías de cumplimiento, el órgano jurisdiccional que conoció del amparo impondrá, de oficio o a petición de parte, multa a la autoridad responsable y requerirá al superior inmediato de ésta, para que la obligue a cumplir sin demora con la sentencia; si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella.

Si el superior jerárquico inmediato de la autoridad responsable es el Presidente de la República el requerimiento se hará por conducto del consejero jurídico del Ejecutivo Federal.

No se entenderá que la sentencia se encuentra cumplida ni en vía de ejecución si la autoridad ha llevado a cabo actos que, por su naturaleza estrictamente formal, su escasa trascendencia en la situación del quejoso, o su falta de contenido jurídicamente relevante frente al derecho violado, revele la intención de la autoridad de evadir los efectos restitutorios de la sentencia.

También se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en la ejecución.

Artículo 192. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con la normatividad correspondiente ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma.

La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo.

Artículo 193. Si a pesar de los requerimientos anteriores no se cumple la sentencia, el órgano jurisdiccional de amparo impondrá multa al superior de la autoridad responsable, hará la declaratoria en el sentido de que existe incumplimiento, y remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando

copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento.

El cumplimiento extemporáneo de la sentencia no exime de responsabilidad al servidor público que incumplió.

Artículo 194. Cuando el órgano jurisdiccional de amparo reciba informe de la autoridad responsable relativo al cumplimiento de la sentencia, dará vista a las partes para que dentro del plazo de cinco días manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, en amparo indirecto decidirá si se encuentra o no cumplida o está en vías de cumplimiento, y en amparo directo, resolverá si formalmente se encuentra cumplida. Si la tiene por incumplida, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo anterior.

Si el órgano jurisdiccional de amparo considera que la sentencia se encuentra en vías de cumplimiento, dará un plazo razonable para que éste se realice de manera total y, en caso de no lograrse, procederá en términos del artículo anterior.

Artículo 195. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, aunque no hayan tenido el carácter de responsables, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo.

Artículo 196. Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda.

Cuando estime que el incumplimiento es excusable, dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad.

Cuando considere que es inexcusable, o hubiere transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, procederá a separar a la autoridad inmediatamente de su cargo y a declararla responsable por el delito contra la administración de justicia. Se le dará vista por tres días, para que alegue por escrito lo que a sus intereses convenga para efectos de la individualización de la pena y, hecho lo anterior, se le impondrá la que corresponda en el plazo de cinco días.

Capítulo II

Repetición del Acto Reclamado

Artículo 197. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada en cualquier tiempo ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga.

Hecho lo anterior, se dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo 193. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto que se estime repetitivo, ello no la exime de responsabilidad.

Artículo 198. Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a la brevedad posible, si existe o no repetición del acto reclamado.

En el primer supuesto, procederá de inmediato a separar a la autoridad de su cargo y a declararla responsable por el delito de incumplimiento de la sentencia de amparo. Hecho lo anterior, le dará vista por tres días para que alegue por escrito lo que a sus

intereses convenga para efectos de la individualización de la pena, la que se le impondrá en el plazo de cinco días.

Si no hubiere repetición, hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano jurisdiccional que los remitió.

Capítulo III

Inconformidad

Artículo 199. El incidente de inconformidad procede contra las siguientes resoluciones:

- I. Las que tengan por cumplida la ejecutoria de amparo;
- II. Las que declaren que existe imposibilidad material o jurídica para ejecutar la misma u ordenen el archivo definitivo del asunto, y
- III. Las que declaren sin materia o infundada la denuncia de repetición de los actos reclamados.

Artículo 200. La inconformidad debe presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional de amparo que dictó la resolución impugnada, dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación.

Artículo 201. El órgano jurisdiccional de amparo, sin decidir sobre la admisión de la inconformidad remitirá el original del escrito, así como los autos del juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 193.

Capítulo IV

Cumplimiento Sustituto

Artículo 202. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso.

Las partes en el juicio podrán convenir el cumplimiento sustituto ante el órgano jurisdiccional de amparo.

Artículo 203. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por el quejoso o decretado de oficio por la Suprema Corte, en los casos en que:

- I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o
- II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o extraordinariamente difícil restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio.

La solicitud del quejoso podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional de amparo, a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia y hasta antes de que se tenga por cumplida.

Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma y cuantía de la restitución.

Capítulo V

Incidente por Exceso o Defecto en la Ejecución de Resoluciones de Amparo

Artículo 204. El incidente a que se refiere este capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por exceso o defecto en la ejecución de las resoluciones que hayan concedido la suspensión de plano, provisional o definitiva, u otorgado el amparo.

Artículo 205. El incidente podrá promoverse por cualquier persona que resulte agraviada por la ejecución, en los plazos siguientes:

I. Tratándose de resoluciones que concedan la suspensión al quejoso, en cualquier tiempo mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo en el principal;

II. En cualquier tiempo, cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que impliquen privación de la vida, restricción a la libertad personal, incomunicación, deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la

incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, y

III. En un año contado a partir del día siguiente de aquél en que surta sus efectos la notificación del auto por el cual se haga del conocimiento del quejoso los términos en que se haya dado cumplimiento a la sentencia, o al en que haya tenido conocimiento de la ejecución si se trata de persona extraña.

Artículo 206. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes:

I. Se presentará ante el órgano jurisdiccional que conozca o haya conocido del juicio de amparo, acompañando copias para cada una de las partes;

II. El órgano jurisdiccional de amparo requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama, y

III. Transcurrido dicho plazo, con informe o sin él, se citará a una audiencia que se celebrará dentro de los cinco días siguientes y se resolverá en el plazo de diez días. En caso de que las partes

únicamente hayan ofrecido pruebas documentales, se omitirá la celebración de la audiencia.

Artículo 207. Si la autoridad responsable omite cumplir cabalmente con la sentencia que establece la existencia del exceso o defecto, dentro de las veinticuatro horas siguientes en el caso de la fracción I del artículo 205 o en los demás casos dentro de los tres días a que haya causado estado la resolución, el órgano jurisdiccional de amparo remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicándose, en lo conducente, las disposiciones de este título.

Capítulo VI

Incidente por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad o de Interpretación Conforme

Artículo 208. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme, se aplica la norma general inconstitucional o se le da un sentido diverso al establecido de manera obligatoria en la declaratoria correspondiente, el afectado podrá hacer valer ante el juez de distrito los medios de defensa relativos a la repetición del

acto reclamado de acuerdo con las reglas de competencia previstas en el capítulo V, del título primero.

Capítulo VII

Disposiciones Complementarias

Artículo 209. Lo dispuesto en este título debe entenderse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional de amparo haga cumplir la sentencia de que se trate dictando las órdenes y medidas de apremio necesarias. Si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario para que le dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez de distrito o servidor público se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento para ejecutarla.

Para los efectos de esta disposición, el juez o servidor público designado podrá salir del lugar de su jurisdicción, dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal. En todo tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia de amparo.

Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la sentencia de que se trate y aquellos en que la

ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado; pero si se tratare de la libertad personal, la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la sentencia y la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda de inmediato, el órgano jurisdiccional de amparo mandará ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones, darán debido cumplimiento a las órdenes que se les giren conforme a esta disposición.

Artículo 210. Si el pleno o la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concedió el amparo no obtuviere el cumplimiento de la sentencia respectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al órgano jurisdiccional de amparo que corresponda, los que se sujetarán a las disposiciones del artículo anterior en cuanto fueren aplicables.

Artículo 211. En los incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente.

Artículo 212. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional.

TÍTULO CUARTO
Jurisprudencia y Declaratoria General de
Inconstitucionalidad o de Interpretación Conforme

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 213. La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios o por contradicción de tesis.

Artículo 214. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito de amparo.

La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 215. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito de amparo es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, la que se refiera a la interpretación de normas generales de carácter local, será obligatoria únicamente para los órganos jurisdiccionales de la entidad federativa de que se trate.

Artículo 216. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito de amparo establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, que deberá contener:

- I. La relación sucinta de los hechos del asunto del que deriva;

II. La identificación de la norma general respecto de la cual se establezca el criterio;

III. Las consideraciones interpretativas, mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya determinado el sentido y los alcances de la norma correspondiente; y

IV. El rubro, los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el criterio y la tesis, y, en su caso, en los asuntos de los cuales derive ésta.

Artículo 217. El pleno, la sala o el tribunal colegiado deberán remitir las tesis en el plazo de quince días al *Semanario Judicial de la Federación*, para su publicación.

Artículo 218. En el *Semanario Judicial de la Federación* se publicarán las tesis que se reciban, y se distribuirán en forma eficiente para facilitar su conocimiento.

Igualmente se publicarán las sentencias de amparo y los votos particulares, siempre que se trate de los necesarios para constituir jurisprudencia o para interrumpirla, así como aquéllos que los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes.

Artículo 219. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes.

Capítulo II

Jurisprudencia por Reiteración de Criterios

Artículo 220. La jurisprudencia por reiteración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en tres sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, con el voto aprobatorio de por lo menos ocho ministros.

Artículo 221. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en tres sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, con el voto aprobatorio de por lo menos cuatro ministros.

Artículo 222. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa.

Artículo 223. Para la sustitución de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas establecidas para su formación.

Artículo 224. Las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o cualquiera de sus ministros, o bien los tribunales colegiados de circuito de amparo o cualquiera de sus integrantes, con motivo de un caso concreto, podrán pedir al pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente que interrumpa o sustituya la jurisprudencia establecida, para lo cual expresarán las razones correspondientes por las cuales se estima debe hacerse.

El pleno o la sala correspondiente resolverán si sustituyen la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas, derivadas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que la integraron. Esta resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en esta ley.

Artículo 225. Tratándose de amparos en revisión contra normas generales, en los que, con motivo de los acuerdos generales a que se refiere el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tribunales colegiados de circuito de amparo deban conocer de ellos por haberse establecido jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia, los propios tribunales colegiados, de oficio o a petición de parte, cuando haya razones fundadas para ello, podrán solicitar al pleno o a las salas de la Suprema Corte de Justicia que ejerzan su competencia originaria, a fin de interrumpir o sustituir la jurisprudencia correspondiente.

Una vez recibida la solicitud se turnará a un ministro a fin de que formule el proyecto de resolución. El pleno o la sala podrá declarar interrumpida o sustituida la jurisprudencia, o desechar la solicitud planteada.

Artículo 226. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito de amparo deberán observarse los requisitos señalados en este capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime.

Capítulo III

Jurisprudencia por Contradicción de Tesis

Artículo 227. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios opuestos sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o entre los tribunales colegiados de circuito de amparo, en los asuntos de su competencia.

Artículo 228. Las contradicciones de tesis entre las salas de la Suprema Corte de Justicia serán resueltas por el pleno; las de los tribunales colegiados de circuito de amparo por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, según la materia. En ambos casos bastará la mayoría simple.

Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios opuestos, optar por otro, declararla inexistente, o sin materia.

La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

Artículo 229. Están legitimados para denunciar la contradicción de tesis los ministros, los órganos que sustentaron los criterios, sus integrantes, los jueces de distrito y las partes en los asuntos que los motivaron.

Artículo 230. Si al tramitarse una contradicción de tesis se advierte que sobre el criterio debatido existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe declararse sin materia y notificarse la resolución respectiva a los órganos jurisdiccionales que sostuvieron los criterios contradictorios.

Artículo 231. Si a juicio de alguno de los ministros existen razones fundadas, podrá solicitar al pleno o a las salas de la Suprema Corte de Justicia, según corresponda, la sustitución de la jurisprudencia por contradicción.

Capítulo IV

Declaratoria General de Inconstitucionalidad o de Interpretación Conforme

Artículo 232. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en juicios de amparo indirecto en revisión, establezca jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad o se establezca la interpretación conforme de

una norma general respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá a emitir la declaratoria general correspondiente.

Artículo 233. Dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la aprobación de la jurisprudencia referida en el artículo anterior, la Suprema Corte de Justicia formulará la declaratoria general de inconstitucionalidad o bien de interpretación conforme.

Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá:

- I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos, y
- II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad o de interpretación conforme.

Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos, salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 235. La declaratoria general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme se publicará en el *Semanario Judicial de la Federación*, en el *Diario Oficial de la Federación* y en el órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma general respectiva.

TÍTULO QUINTO

Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos

Capítulo I

Medidas Disciplinarias y de Apremio

Artículo 236. Para mantener el orden y exigir respeto, los órganos jurisdiccionales de amparo podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, y previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias:

I. Multa, o

II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado.

Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas:

I. Multa;

II. Auxilio de la fuerza pública, y

III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del ministerio público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el ministerio público federal, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República.

Capítulo II

Responsabilidades y Sanciones

Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado, y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con

quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo.

Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día.

Las referencias que en este capítulo se hacen a otros artículos se entienden hechas a preceptos de esta ley.

Artículo 239. No se aplicarán las multas establecidas en esta ley cuando el quejoso impugne actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales.

Artículo 240. En el caso del artículo 10, si quien promueve no tiene la representación que afirma, se le impondrá multa de treinta a trescientos días.

Artículo 241. Tratándose de lo previsto en el artículo 13, si quien afirma ser defensor no lo demuestra, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días.

Artículo 242. En el caso del párrafo tercero del artículo 15, a la parte que teniendo conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado no lo comunique oportunamente al órgano jurisdiccional de amparo, se le impondrá multa de cincuenta a quinientos días.

Artículo 243. En el caso de los artículos 19, párrafo segundo y 22, si los jefes o encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se niegan a recibir o transmitir los mensajes de referencia, se les impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 244. En el caso del artículo 26, fracción III, inciso b), a la autoridad responsable que no proporcione el domicilio del tercero interesado se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 245. En el caso del artículo 27 fracción I, a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 246. En el caso del artículo 27, fracción II, si el encargado de la oficina de correos no envía el oficio de referencia, se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 247. En los casos de los artículos 30 y 66, al servidor público que de mala fe practique una notificación que sea declarada nula se le impondrá multa de treinta a trescientos días.

Artículo 248. Se impondrá multa de cincuenta a quinientos días a quien para dar competencia a un juez de distrito o tribunal colegiado de circuito de apelación, de mala fe designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales.

Artículo 249. En los casos a que se refiere al artículo 47, si el juez de distrito o tribunal colegiado de circuito de apelación no encontraren motivo fundado para la promoción de dos o más juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, impondrá al o

los infractores, multa de cincuenta a quinientos días, salvo que se trate de los casos mencionados en el artículo 14.

Artículo 250. Cuando se deseche o desestime una recusación se impondrá multa de treinta a trescientos días de salario.

Artículo 251. En el caso del artículo 62, a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá multa de treinta a trescientos días.

Artículo 252. En el caso del párrafo tercero del artículo 66, cuando se promueva una nulidad que sea declarada notoriamente improcedente se impondrá multa de treinta a trescientos días.

Artículo 253. En el caso del párrafo segundo del artículo 70, al responsable de la pérdida de constancias se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 254. En el caso del artículo 119, si la autoridad no expide con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes o los expide incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de cincuenta a quinientos días; si a pesar de la solicitud del órgano jurisdiccional de amparo no los remite, o los remite incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 255. En el caso del artículo 120, si el juez de distrito desechare la impugnación presentada, impondrá al promovente, que actúo con notoria mala fe, multa de treinta a trescientos días.

Artículo 256. En el caso del artículo 143, si se acredita que la segunda suspensión se solicitó indebidamente y con notoria mala fe, se impondrá multa de cincuenta a quinientos días.

Artículo 257. En el caso del artículo 189, si la autoridad responsable no decide sobre la suspensión en las condiciones señaladas, se impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 258. Las multas a que se refieren los artículos 191, 192 y 193, serán de cien a mil días.

Artículo 259. En el caso de la fracción I de los artículos 236 y 237, las multas serán de cincuenta a mil días.

Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que:

I. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional;

II. No informe o no remita, en su caso, la certificación relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, la de presentación de la demanda y de los días inhábiles que mediaron entre uno y otro acto, y

III. No tramite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por esta ley las constancias que le sean solicitadas por la autoridad de amparo o por las partes en el juicio constitucional.

Capítulo III

Delitos

Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:

I. Al quejoso que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de

procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, y

II. Al quejoso o tercero interesado que en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.

Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión que:

I. Al rendir informe previo o con justificación afirme una falsedad o niegue la verdad;

II. Revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo;

III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra, y

IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.

Artículo 263. Los jueces de distrito; las autoridades judiciales de los estados y del Distrito Federal cuando actúen en auxilio de la justicia federal; los presidentes de las juntas y de los tribunales de conciliación y arbitraje; los magistrados de circuito y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son responsables en los juicios de amparo por los delitos y faltas que cometan en los términos que los definen y castigan el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de este capítulo.

Artículo 264. Al ministro, magistrado o juez que dolosamente hubiere negado la causa que funda la recusación y ésta se comprueba, se le impondrán pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta a trescientos días, destitución e inhabilitación por un lapso de dos a seis años.

Artículo 265. Se impondrá pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta a trescientos días, destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando:

I. Dolosamente no suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de privación de la vida, o se trate de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si dichos actos no se ejecutan por causas ajenas a la intervención de los órganos jurisdiccionales mencionados, y

II. Dolosamente no concediere la suspensión, siendo notoria su procedencia.

Artículo 266. Se impondrá pena de tres a siete años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a siete años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente:

I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de privación de la vida, o se trate de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se lleva a efecto su ejecución, y

II. Ponga en libertad al quejoso en contra de lo previsto en las disposiciones aplicables de esta ley.

Artículo 267. Se impondrá pena de cuatro a ocho años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cuatro a ocho años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente:

I. Incumpla una sentencia de amparo;

II. Repita el acto reclamado, y

III. Omita cumplir cabalmente con la sentencia que establece la existencia del exceso o defecto.

Artículo 268. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión o multa de treinta a trescientos días y, en ambos casos, destitución e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que:

I. Aplique una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad, y

II. Cuando en el ejercicio de sus funciones, desconozca el sentido que de manera obligatoria la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiere otorgado a una norma general mediante la declaratoria general de interpretación conforme.

Artículo 269. Las multas a que se refiere este capítulo, son equivalentes a los días multa previstos en el Código Penal Federal.

Artículo 270. Cuando al concederse definitivamente al quejoso el amparo aparezca que la violación de garantías cometida constituye delito, se pondrá el hecho en conocimiento del ministerio público federal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de enero de 1936, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente ley.

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesa y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

CUARTO. A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de 10 de enero de 1936, incluidas las procesadas o

sentenciadas, les serán aplicadas las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido.

QUINTO. Los actos a que se refieren las facciones II y III del artículo 16 de esta ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución.

SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley.

SÉPTIMO. Para la integración de la jurisprudencia por reiteración de criterios a que se refiere la presente ley, no se tomarán en

cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a la ley anterior.

OCTAVO. Las declaratorias generales de inconstitucionalidad y de interpretación conforme no podrán ser hechas respecto de tesis aprobadas conforme a la ley anterior.

NOVENO. La jurisprudencia obligatoria por contradicción de tesis a la entrada en vigor de la presente ley, podrá ser sustituida en términos de esta ley.

DÉCIMO. Hasta en tanto los tribunales unitarios de circuito sean constituidos como tribunales colegiados de apelación, las referencias que en esta ley se hacen a éstos últimos se entenderán hechas a los primeros.

DÉCIMO PRIMERO. La Suprema Corte de Justicia de la nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar las medidas necesarias para lograr el efectivo e inmediato cumplimiento de la presente ley.

**ÍNDICE DEL PROYECTO DE LEY DE AMPARO
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

**TÍTULO PRIMERO
Reglas Generales**

Capítulo I

Disposiciones Fundamentales..... 81

Capítulo II

Capacidad y Personería 82

Capítulo III

Plazos 90

Capítulo IV

Notificaciones 94

Capítulo V

Competencia..... 103

Sección Primera	
Reglas de Competencia	103
Sección segunda	
Conflictos Competenciales	108
 Capítulo VI	
Impedimentos, Excusas y Recusaciones	116
 Capítulo VII	
Improcedencia	122
 Capítulo VIII	
Sobreseimiento	130
 Capítulo IX	
Incidentes	131
Sección Primera	
Nulidad de Notificaciones	132
Sección Segunda	
Reposición de Constancias de Autos	133
 Capítulo X	
Sentencias	134

Capítulo XI

Medios de Impugnación	140
Sección Primera	
Recurso de Revisión.....	141
Sección Segunda	
Recurso de Queja.....	150
Sección Tercera	
Recurso de Reclamación.....	156

TÍTULO SEGUNDO

De los Procedimientos de Amparo

Capítulo I

El Amparo Indirecto	157
Sección Primera	
Procedencia y Demanda	157
Sección Segunda	
Substanciación	164
Sección Tercera	
Suspensión del Acto Reclamado.....	172
Primera Parte	
Reglas Generales.....	172

Segunda Parte	
En Materia Penal.....	189

Capítulo II

El Amparo Directo	195
Sección Primera	
Procedencia.....	195
Sección Segunda	
Demanda	203
Sección Tercera	
Substanciación	207
Sección Cuarta	
Suspensión del Acto Reclamado.....	212

TÍTULO TERCERO

Cumplimiento y Ejecución

Capítulo I

Cumplimiento e Inejecución	213
----------------------------------	-----

Capítulo II

Repetición del Acto Reclamado	218
-------------------------------------	-----

Capítulo III

Inconformidad	219
---------------------	-----

Capítulo IV

Cumplimiento Sustituto.....	220
-----------------------------	-----

Capítulo V

Incidente por Exceso o Defecto en la Ejecución de Resoluciones de Amparo	222
---	-----

Capítulo VI

Incidente por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad o de Interpretación Conforme	224
---	-----

Capítulo VII

Disposiciones Complementarias	225
-------------------------------------	-----

TÍTULO CUARTO

Jurisprudencia y Declaratoria General de Inconstitucionalidad o de Interpretación Conforme

Capítulo I

Disposiciones Generales.....	227
------------------------------	-----

Capítulo II

Jurisprudencia por Reiteración de Criterios 230

Capítulo III

Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 233

Capítulo IV

Declaratoria General de Inconstitucionalidad o de
Interpretación Conforme 234

TÍTULO QUINTO

Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos

Capítulo I

Medidas Disciplinarias y de Apremio 236

Capítulo II

Responsabilidades y Sanciones 237

Capítulo III

Delitos..... 243

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 249

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

La consolidación del Estado de Derecho constituye uno de los más importantes objetivos de nuestras instituciones. El Estado de Derecho tiene, como principal finalidad, lograr una justa convivencia social garantizada, entre otras cosas, por el reconocimiento y protección de los derechos humanos ante la actuación arbitraria de las autoridades.

El respeto al derecho de los demás debe ser exigido, en primer lugar, a aquellas personas que ejercen el poder y que desarrollan funciones propias del Estado. Por ello, un Estado que pretenda aspirar a que sean las normas jurídicas las que rijan su vida en sociedad, debe tener como uno de sus principales compromisos el de velar por que la actuación de sus autoridades se realice con estricto respeto a los derechos y al patrimonio de sus gobernados.

Pero de nada sirve el reconocimiento de nuestros derechos si no contamos con medios eficaces para hacerlos valer. La sociedad mexicana demanda cada vez mejores garantías y controles frente al poder público, pero también mejores sistemas de impartición de justicia que los hagan efectivos. Por ello, constantemente se empeña en el perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos que garanticen verdaderamente la preservación de sus derechos ciudadanos.

Debemos reconocer que esa preocupación no es reciente. En nuestro país, la justicia constitucional cuenta con una larga tradición que se remonta a la primera mitad del siglo antepasado. En efecto, la Constitución del Estado de Yucatán fue la primera en consagrar expresamente el juicio de amparo como un instrumento para proteger a los gobernados frente a los actos y leyes de las autoridades.

Con posterioridad dicho mecanismo de control de los actos y leyes de la autoridad fue adoptado a nivel federal por el Acta de Reformas a la Constitución Federal de la República de 1824 expedida en 1847, y se consagro definitivamente en la Carta Federal de 1857 esa forma, como la máxima institución jurídica que ha aportado nuestro país al mundo jurídico.

El constituyente de 1917 convencido de la importancia de la institución del amparo, la incorporó en los artículos 103 y 107 constitucionales. Sin embargo, a diferencia de la Constitución de 1857 que era muy sucinta en su reguición, nuestra Norma Fundamental es mucho más explícita y contiene una completa regulación de los principios fundamentales para el ejercicio del juicio de amparo que ha imperado hasta nuestros días.

Sin embargo, toda institución –por más benéfica que sea–, si no evoluciona acaba por ser poco útil. Ante la constante evolución de la sociedad y de las complejas relaciones que en ella se presentan, las instituciones jurídicas deben innovarse con el fin de adecuarse a la realidad que pretenden regular. Las disposiciones en materia de amparo no son la excepción. Prueba de ello, lo constituyen las diversas reformas y adiciones que a través de los años se han realizado a los principios constitucionales que rigen el juicio de amparo.

Hoy nos encontramos ante la inevitable necesidad de transformar radicalmente nuestro juicio de amparo, en aras de perfeccionar y ampliar la protección de los derechos fundamentales, garantizar una mejor impartición de justicia y adecuar nuestra más importante institución jurídica a los nuevos tiempos. Ésta no sólo es una demanda de la comunidad jurídica, sino de la sociedad que exige hacer de este México un país más justo para todos.

Este es el espíritu de la reforma constitucional que hoy se presenta, y que constituye un gran reto, pero confiamos que con el esfuerzo de nuestro órgano revisor de la Constitución y con el compromiso de todos los que intervienen en el sistema de impartición de justicia, así como el de la sociedad en su conjunto,

se logrará este noble propósito en beneficio de todos los mexicanos y, sobre todo, de los más desprotegidos.

1. En primer lugar el proyecto propone la reforma del primer párrafo del artículo 94 de nuestra Constitución y otros preceptos correlativos, con el objeto de transformar a los tribunales unitarios en colegiados de circuito en materia de apelación. Lo anterior tiene por objeto hacer su naturaleza más acorde con un órgano de segunda instancia que, por lo general, revisa de forma colegiada las resoluciones de órganos individuales de primera instancia.

En virtud de lo anterior, a fin de evitar confusiones en cuanto a su denominación y mantener separadas las funciones de los dos tipos de tribunales colegiados de circuito que existirían, se propone distinguir a los que conozcan del juicio de amparo de aquéllos que, de aprobarse el proyecto, sean competentes en materia de apelación.

2. En la actualidad, el noveno párrafo del artículo 100 constitucional establece la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia revise las decisiones del Consejo de la Judicatura en cuanto a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces. Sin embargo, no incluye la posibilidad de

que jueces y magistrados afectados por un cambio de adscripción puedan acudir a nuestro máximo tribunal a fin de que éste revise esa decisión del Consejo. El cambio de adscripción de un magistrado o de un juez afecta de manera importante su vida personal así como el funcionamiento del juzgado o tribunal al que pertenece. De esta forma, se considera conveniente introducir en el texto constitucional la posibilidad de que las decisiones sobre cambio de adscripción emitidas por el Consejo puedan ser revisadas. Esto beneficiaría a la seguridad jurídica de nuestros impartidores de justicia y, por tanto, consolidaría el Estado de Derecho.

3. El tema más trascendente de la reforma que se propone es la transformación de nuestro juicio de amparo que, principalmente, se encuentra regulado en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución.

a) Uno de los cambios más importantes que se proponen es el relativo al objeto de protección del juicio de amparo. Hasta hoy el mismo se ha limitado a las denominadas garantías individuales que, básicamente, quedaron establecidas desde la Constitución de 1857 y fueron repetidas, en lo sustancial, en la de 1917. La extensión del juicio de amparo se ha dado, ante todo, por las interpretaciones que se dan a las garantías de legalidad y de

seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a las reinterpretaciones a ciertos preceptos de la Constitución. Sin embargo, en el derecho comparado se ha producido un movimiento completamente diferente al que presenciamos en México. El ámbito de protección de los juicios constitucionales se ha extendido también a lo previsto en materia de derechos humanos por diferentes instrumentos del derecho internacional. Las soluciones han variado en este sentido, pues en algunos casos se ha dado jerarquía constitucional a todos los instrumentos celebrados por un Estado; en otros sólo a algunos de ellos; en otros se han dejado como objeto de protección pero sin darle jerarquía constitucional, o en otros, finalmente, previéndose que el contenido de esos instrumentos debe guiar la interpretación que de los derechos fundamentales hagan los tribunales nacionales.

Frente a la variedad de modelos que se podrían adoptar, y dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades públicas, se considera necesario ampliar el marco de protección de ese proceso a la materia del control. La solución que se propone es en el sentido de que mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos contenidos

en los cinco instrumentos internacionales generales que en materia de derechos humanos ha suscrito el Estado mexicano: Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por la importancia y extensión de esos cinco instrumentos, es evidente que el juicio de amparo habrá de transformarse substancialmente y no sólo en cuanto a su denominación como "juicio de garantías". Las importantes consecuencias que habrán de sobrevenir; sin embargo, no afectan a otras partes de nuestro ordenamiento, como podría ser la relación jerárquica entre la Constitución y los tratados internacionales, puesto que aun cuando éstos últimos sean objeto de protección del juicio, su jerarquía seguirá siendo inmediatamente inferior a la propia Constitución.

Lo relevante de la propuesta que se formula es que habrá de darse una ampliación explícita de los contenidos a los cuales deberán subordinar sus actuaciones las autoridades públicas, lo que habrá de permitir la consolidación del Estado de Derecho y la progresiva judicialización de las actividades públicas.

De esta forma, se propone que nuestro artículo 103 constitucional establezca la procedencia del juicio de amparo contra normas generales o actos de autoridad que violen las garantías que consagra nuestra Constitución y los derechos humanos que protegen los instrumentos internacionales generales en la materia.

Como puede observarse, en el proyecto se pretende eliminar dos fracciones del actual artículo 103 debido a que el sistema de resolución de controversias entre la Federación y los estados o el Distrito Federal ya se encuentra específicamente regulado por el artículo 105 constitucional. Además, la ilegalidad de los actos de las autoridades por la invasión de competencias entre ámbitos de gobierno puede ser impugnada por los particulares, como se ha hecho regularmente hasta ahora, mediante la invocación de la violación de la garantía prevista en el artículo 16 que establece la debida competencia de las autoridades.

Asimismo, se propone cambiar el término “leyes” de ese mismo artículo por el de “normas generales” debido a que, en realidad, la denominación utilizada en nuestro actual artículo 103 es equívoco ya que en él no sólo quedan incluidas las leyes en estricto sentido, sino también los reglamentos expedidos por los titulares

del Poder Ejecutivo a nivel federal y local y los tratados internacionales, como lo señalan el octavo párrafo del artículo 94 vigente y el inciso a) de la fracción VIII, del artículo 107 de la Constitución. En ese sentido, se pretende que el juicio de amparo no sólo proceda contra este tipo de normas generales, sino también contra las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que, en ningún caso, podrían contravenir lo establecido por la Constitución Federal.

En virtud de lo anterior, se proponen ajustes al texto constitucional para introducir el concepto "normas generales" en los términos antes señalados que se contemplan en la reforma al artículo 107, fracción VIII, inciso a) vigente y a su fracción IX.

b) Además del objeto de protección y los efectos de las sentencias, la cuestión más relevante del juicio de amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo. Hasta ahora, en nuestro país se ha seguido la idea de que para acudir al juicio de amparo es necesaria la existencia de un interés jurídico, identificado con un derecho subjetivo; es decir, que sólo la persona que se ve afectada de manera personal y directa por un acto de autoridad que viole sus garantías puede solicitar la protección de la justicia federal.

Puede ser que en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus posibilidades de acceso a los procesos fuera aceptable, toda vez que se pensaba a la sociedad mexicana como altamente homogénea y debidamente representada por los órganos políticos competentes para la expedición de normas generales. Sin embargo, cuando la forma de representación de la sociedad de nuestros tiempos es la pluralidad política y cuando existe una lucha para lograr la incorporación al orden jurídico de una serie de demandas sociales, no es posible seguir exigiendo este tipo de interés.

La forma de resolver el problema del interés para acudir al juicio tiene que ver, entonces, con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia. En este sentido, existe una forma extrema de solución en ordenamientos de otros países que radica en la previsión del interés simple, que permite que cualquier persona que tenga un reclamo se presente a juicio y logre la instauración de un litigio. Esta modalidad presenta, más inconvenientes que ventajas cuando llega a darse de forma generalizada y respecto de cuestiones tan complejas y delicadas como los juicios constitucionales, por lo cual se estima que no es conveniente ni razonable proponer una ampliación en el interés para promover el juicio de amparo en forma de interés simple.

Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus términos actuales o abrir nuevas posibilidades de impugnación, se considera necesario introducir el sistema intermedio que suele denominarse de interés legítimo. Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que tenga un interés jurídico, es decir una afectación personal y directa o, y aquí está lo novedoso, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí una situación jurídica derivada del propio orden jurídico.

Este tipo de interés es predominante del derecho administrativo. Es decir, puede haber personas para las que la observancia o inobservancia de las normas por parte de la administración pública resulte en una ventaja o desventaja de modo particular respecto de las demás. Esto puede ocurrir por dos razones: en primer lugar, puede ser el resultado de la particular posición de hecho en que uno o algunos ciudadanos se encuentren que los hace más sensibles que otros frente a un determinado acto administrativo; en segundo lugar, puede ser el resultado de que ciertos particulares sean los destinatarios del acto administrativo que se discute. De esta forma, la noción de interés legítimo consiste en el interés cualificado que ciertos gobernados pueden

tener respecto de la legalidad de determinados actos administrativos.

Por su amplitud, este criterio de legitimación no puede aceptarse en todos los supuestos. Por ello, se propone acotarlo tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, rompería el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener.

En virtud de lo anterior, se propone la reforma de la fracción I del artículo 107 de nuestra Constitución con el objeto de cambiar el concepto de agravio, que equivale en la actualidad al interés jurídico con el que debe acudir al amparo, por el de interés legítimo, haciendo una breve explicación de los alcances de este interés para evitar su confusión con el interés simple que tantos perjuicios podría ocasionar en el sistema de impartición de justicia como se ha descrito anteriormente. Asimismo, en esa fracción se especifica que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés

con el que debe acudir el quejoso al amparo debe ser jurídico, es decir, que se le agravie de forma personal y directa.

c) El tema de los alcances de las sentencias de amparo es trascendental en este proyecto. La sociedad se ha pronunciado en el sentido de que el juicio de amparo sea más accesible para todos, que no nada más sirva para gente con los suficientes recursos como para contratar un abogado especializado que pueda impugnar actos o normas contrarias a la Constitución. Ésta, como ley suprema, debe ser aplicada a todos por igual. Su supremacía no puede depender de la capacidad económica de los individuos para acudir al juicio de amparo.

En tal virtud, se propone establecer en la fracción II del artículo 107 de nuestra norma fundamental la posibilidad de que, mediante un procedimiento adicional al que hoy existe para la resolución de la inconstitucionalidad de normas generales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia cuando constate la contravención de una norma inferior con la constitucional, tenga la facultad de emitir una declaratoria con efectos generales que beneficie a toda la población.

Debido al cambio sustancial que esto significa en nuestro juicio de amparo y a las posibles implicaciones que pueda acarrear, es conveniente explicar de manera detallada el esquema que se propone:

- El esquema consiste en conservar el procedimiento de amparo contra normas generales de la misma forma que en la actualidad viene operando y, sólo en el caso de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca jurisprudencia por reiteración de criterios, en sesiones distintas y con mayoría calificada, la inconstitucionalidad de la norma, entonces se iniciaría un nuevo procedimiento para determinar los efectos de la declaratoria general de inconstitucionalidad. La declaratoria no surtiría efectos hasta que el Pleno haya publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, en el *Semanario Judicial de la Federación* y en el órgano oficial en el que se hubiere publicado la norma general respectiva. Lo anterior con el objeto de dar publicidad suficiente a las declaratorias y estar en posibilidad de hacerlas cumplir.

De esta forma, si el Pleno de la Suprema Corte no logra establecer tres resoluciones en el mismo sentido o dichas resoluciones no cuentan con la mayoría calificada, los efectos de las sentencias seguirán siendo particulares.

Cabe destacar que en el esquema que se propone, únicamente tratándose de amparos indirectos en revisión en los que fueron oídas las autoridades que expidieron y promulgaron las normas generales, sólo nuestro máximo tribunal, funcionando en Pleno, puede hacer la declaratoria con efectos generales. Ni las salas, ni los tribunales colegiados de circuito, ni los juzgados de distrito contarían con tan importante facultad.

- Ahora bien, las sentencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia sobre normas generales podrían tener varias posibilidades: establecer si la norma debe ser declarada constitucional o inconstitucional o, lo que es más novedoso, si es posible establecer una interpretación de la norma impugnada que la haga conforme con el propio texto constitucional, que salve la objeción que de ella se hubiere hecho. Esta solución es importante puesto que si la acumulación de sentencias declarativas de inconstitucionalidad puede dar lugar a la declaratoria con efectos generales de la norma impugnada, conviene que la Suprema Corte cuente con las atribuciones necesarias para, simultáneamente, preservar la supremacía constitucional y la integridad del orden jurídico.

- En cuanto al procedimiento adicional que se crearía para determinar los efectos de la declaratoria general o de interpretación conforme, se estima necesario separarlo de las sentencias judiciales que hayan servido como precedente.

d) Se considera que deben conservarse las prerrogativas que la Constitución otorga a los ejidatarios y comuneros, como aquél que establece el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional que se refiere a la obligación oficiosa de recabar las pruebas y acordar las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

La supresión de la primera parte del cuarto párrafo de la fracción II del artículo 107 de ninguna manera significa la eliminación de una prerrogativa para los ejidatarios y comuneros, sino únicamente un ajuste para hacer acorde el texto con la reforma que se propone a la fracción XIV del propio artículo que se refiere a la eliminación del sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia en la que se ahondará más adelante. Debido a que en dicha fracción se plantea que estas figuras se eliminen, entonces no habría necesidad de hacer esta distinción en cuanto al amparo agrario ya que en ningún caso procedería el

sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia.

e) En relación con la facultad de atracción que puede ejercer la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre asuntos que se encuentren en trámite en los tribunales colegiados de circuito ya sea en amparo directo o en revisión del indirecto, se propone eliminar a nivel constitucional que dicha facultad pueda ser solicitada por el tribunal colegiado de circuito de amparo correspondiente o por el Procurador General de la República y únicamente se deje esta facultad de oficio para nuestra máximo tribunal. Lo anterior con el objeto de agilizar los procedimientos de amparo ya que en la actualidad dichas peticiones paralizan el procedimiento en tanto la Corte decide sobre el particular. Ello implicará necesariamente que en la ley reglamentaria se establezcan mecanismos para hacer del conocimiento de los ministros de la Suprema Corte o de ésta en su conjunto este tipo de asuntos para que pueda, en su caso, ejercitar dicha facultad de atracción en los casos que por sus características especiales, así lo ameriten sin que queden una gran cantidad de juicios paralizados.

En ese sentido se propone reformar el último párrafo del inciso d) de la fracción V y el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 constitucional vigente.

f) Una de las críticas más insistentes a la figura del amparo es el abuso que constantemente se hace de él. En realidad, el sentimiento negativo que dicho abuso genera en la sociedad se refiere principalmente a la materia de la suspensión y no tanto al otorgamiento del amparo en el fondo. La sociedad demanda una institución que equilibre, por un lado, la paralización de un acto que posiblemente lesione garantías, pero por el otro, pondere el interés que la propia sociedad pueda tener para que dicho acto no quede suspendido. Actualmente, la fracción X del artículo 107 establece que dicha ponderación estriba en la naturaleza de la violación alegada, en la dificultad de reparar los daños y perjuicios que pudiera sufrir el quejoso con la ejecución o los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.

Se considera que dicho esquema debe ser modificado y que sería más adecuado que la ponderación girara entre dos aspectos fundamentales: la apariencia de buen derecho y el interés social. La apariencia de buen derecho es un concepto ya reconocido por la Suprema Corte de Justicia y constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo en las últimas

décadas. Cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis en cada caso particular de estos dos aspectos que le permitan otorgar la medida cautelar en los casos que así lo ameriten y no otorgarla cuando lesione el interés público o la sensibilidad social en el asunto. En ese sentido, la ley reglamentaria precisará los instrumentos con los que el juez contará para poder hacer este análisis ponderado, los debidos alcances de la suspensión y los mecanismos para su control.

g) El primer párrafo de la fracción XII del artículo 107 constitucional prevé la llamada jurisdicción concurrente que consiste en que en los casos penales, el promovente cuenta con la alternativa de acudir directamente al juez o tribunal de amparo o bien dirigirse al superior del juzgador a quien se atribuye la violación. En este último supuesto, el superior tramita el juicio de la misma forma que si fuera una instancia federal de amparo, con la inconveniencia de que este tipo de tribunales no está familiarizado en su práctica cotidiana con estos procedimientos. Esta jurisdicción rara vez es utilizada y, con el incremento sustancial de juzgados de distrito distribuidos por todo el país que se ha dado en los últimos años, parece dejar de tener sentido su conservación. En tal virtud, se propone eliminar la jurisdicción

concurrente suprimiendo el primer párrafo de la fracción XII del artículo 107.

h) Asimismo, el segundo párrafo de la fracción XII establece la jurisdicción auxiliar de los órganos del orden común para los casos de urgencia de petición de amparo, cuando en el lugar en que se ejecutan o tratan de ejecutar los actos violatorios no reside un juez de distrito. Debido a la excepcionalidad con la que debe operar esta jurisdicción, la ley reglamentaria vigente establece que puede proceder en los casos que estima más graves de violación de garantías.

i) En relación con el sistema de denuncia de contradicción de tesis establecido en la fracción XIII, se propone facultar a los magistrados de los tribunales colegiados de circuito de amparo que sustenten tesis contradictorias y a los ministros, para denunciar dicha contradicción ya que en la actualidad únicamente tienen legitimación como órganos colegiados y no como integrantes de los mismos. Igualmente se otorga esa facultad a los jueces de distrito.

j) El sobreseimiento y la caducidad de la instancia por inactividad procesal en el juicio de amparo han sido objeto de numerosas objeciones. En la actualidad, en virtud de que el

Poder Judicial de la Federación, ha consolidado la carrera judicial y puede ejercer eficazmente sus funciones, no parece necesario mantener una solución difícilmente justificable fuera del contexto del rezago. Estas figuras procesales no deben afectar al justiciable que ha sometido su litigio a los órganos de amparo, sino atribuirse a éstos últimos en cuanto no resuelven dentro de los plazos que marca la ley. En tal virtud, se propone eliminar esta figura previstas en la fracción XIV del artículo 107 constitucional. Asimismo se eliminaría de los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo prevista en el tercer párrafo de la fracción XVI vigente.

k) La introducción del Procurador General de la República o el agente del Ministerio Público Federal que aquel designe como parte en el juicio de amparo obedeció a incorporar en el juicio de constitucionalidad a un representante de la sociedad como "parte equilibradora" en los casos en que éste considerara de interés público. Sin embargo, la práctica ha revelado que la participación del Ministerio Público Federal en el juicio de amparo rara vez cumple dicho objetivo y sí retrasa y complica los juicios la mayoría de las veces. En tal virtud, se propone que sólo intervenga cuando se trate de amparos en los que se impugnen normas generales. Debido a que lo que se está juzgando son normas cuya constitucionalidad, sin duda, representa un caso de

relevancia e interés para la Nación, se considera pertinente conservar su participación.

En ese sentido, se propone hacer ajustes al texto de la fracción XV del artículo 107 constitucional.

l) Uno de los temas más complejos del juicio de amparo es el relativo a la ejecución de las sentencias. La importancia radica, como es evidente, en el hecho de que de no lograrse la realización material y rápida de las sentencias, el juicio mismo no tendría ningún sentido. A pesar de su importancia, la materia de ejecución ha tenido un desarrollo ciertamente confuso y complicado, lo que ha propiciado situaciones de indefensión o, lo que es más grave, de impunidad.

Para remediar estas deficiencias, se propone establecer un nuevo mecanismo que tiene que ver con la forma de sancionar a aquellos servidores públicos que hubieren incumplido con las sentencias de amparo. A la fecha, la Suprema Corte ha estimado que la interpretación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución vigente es en el sentido de que el Pleno debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa a efecto de que este órgano individualice la pena que le corresponde. La solución que se

propone ahora es en el sentido de que, cumpliendo con el derecho de audiencia, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización.

Asimismo, se pretende extender la posibilidad de separación del cargo a todas aquellas autoridades que, con motivo de sus funciones estén obligadas al cumplimiento de las sentencias.

Estos procedimientos se aplicarán también tratándose del incumplimiento de las autoridades a la declaratoria general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme que haga la Suprema Corte de Justicia o de incumplimiento a resoluciones que otorguen la suspensión del acto reclamado.

Para la conservación del Estado de Derecho se considera indispensable que la autoridad que incumpla con la sentencia, con la declaratoria general, repita el acto reclamado o viole la suspensión, pueda ser inmediatamente procesada por el delito que corresponda para lo cual no se requerirá de declaración de procedencia en el caso que sea un servidor público que goce de inmunidad procesal. En ese sentido pretende reformarse el artículo 112 de nuestra Constitución.

m) Finalmente, se hacen ajustes de mera forma y redacción al texto constitucional para lograr claridad y sencillez como la reforma al artículo 107, fracciones III, inciso a), VI, XI y XVII. Asimismo, se introducen, a nivel constitucional, figuras ya existentes en nuestro sistema de amparo vigente que deben conservarse y que actualmente se encuentran previstas en la ley reglamentaria como la adición que se hace al texto vigente en el artículo 107, fracciones IV, en cuanto al agotamiento de recursos previos y la VII, en cuanto a los supuestos de ejecución para determinar la competencia en amparo indirecto.

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 94, primero, sexto, séptimo y octavo párrafos; 100, noveno párrafo; 103; 105, fracción III, y 107, así como se adiciona un tercer párrafo al artículo 112, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

**PROYECTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados de Circuito y en Juzgados de Distrito.

(...)

(...)

(...)

(...)

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia está facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que compete conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos,

aquélos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

(...)

(...)

(...)

Artículo 100. ...

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, en su contra no procede juicio ni recurso alguno, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, cambio de adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

(...)

Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales o actos de autoridad que violen las garantías que consagra esta Constitución o los derechos humanos que protegen los instrumentos internacionales de carácter general en la materia, que son la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 105. ...

I a II. ...

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito de Apelación o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

(...)

(...)

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola las garantías o los derechos previstos en el artículo 103 y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la norma general o acto que la motivare.

Sin embargo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezca jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad o se determine la interpretación conforme de una norma general respecto de esta Constitución, procederá a emitir la declaratoria general correspondiente, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio las pruebas y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo ejidal o comunal no procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta.

III. (...)

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores e incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia;

b) (...)

c) (...)

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo

mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en si mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo competente de conformidad con la ley reglamentaria, en los casos siguientes:

a) a d)...

La Suprema Corte de Justicia de oficio podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito de

Amparo y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia para dictar sus resoluciones;

VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados de Circuito de Apelación procede revisión.

De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia podrá conocer de oficio de los amparos en revisión que por su interés y trascendencia lo ameriten.

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las siguientes resoluciones:

a) Las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su presidente, en cumplimiento de los acuerdos generales respectivos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras, y

b) Las que decidan sobre el exceso o defecto en la ejecución de una sentencia de amparo, siempre que en ella se hubiese declarado la inconstitucionalidad de una norma general o determinado la interpretación directa de un precepto constitucional;

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las demás materias, mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;

XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Colegiados de Circuito de Apelación los cuales resolverán sobre la suspensión;

XII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito de Apelación no residieren en el mismo lugar de la autoridad responsable, y se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de esta Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, la ley determinará el órgano jurisdiccional del fuero común ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que deberá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los términos que la misma ley establezca:

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros, cualquiera de los órganos que sustentaron los criterios, sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron establecidas, podrán denunciar la contradicción ante la

Suprema Corte de Justicia, a fin de que el pleno o la sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de aquéllas, sus integrantes o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

(...)

XIV. Se deroga

XV. El Procurador General de la República o el agente del ministerio público federal que al efecto designare, será parte en los juicios de amparo contra normas generales, en términos de la ley reglamentaria;

XVI. Si concedido el amparo la autoridad respectiva repitiere el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación procederá de inmediato a separarla de su cargo y a declararla

responsable por el delito que prevea la ley reglamentaria, dándosele vista para que alegue lo que a sus intereses convenga para efectos de la individualización de la pena.

Si la autoridad respectiva incumpliere la sentencia que concedió el amparo y dicho incumplimiento es excusable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dará un plazo razonable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere que el incumplimiento es inexcusable, o cuando hubiere transcurrido el plazo referido, procederá de inmediato a separar de su cargo al servidor público y a declararlo responsable por el delito que prevea la ley reglamentaria, dándosele vista para que alegue lo que a su interés convenga para efecto de la individualización de la pena.

Este procedimiento se aplicará también tratándose de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme y de resoluciones que otorguen la suspensión del acto reclamado.

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional de amparo, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

en los casos en que la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o que, por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o extraordinariamente difícil restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. El incidente correspondiente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán convenir el cumplimiento sustituto ante el órgano jurisdiccional de amparo.

No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional.

XVII. La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado o que, en los casos de suspensión, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente conforme a lo establecido en la ley reglamentaria, y

Artículo 112. ...

(...)

Tampoco se requerirá declaración de procedencia cuando la Suprema Corte de Justicia ejerza la facultad a que se refiere la fracción XVI del artículo 107.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor en la misma fecha en que entre en vigor la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura Federal deberá realizar los actos necesarios para la conversión de los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de circuito de apelación. Asimismo, deberá publicar en el *Diario Oficial de la Federación*, en el *Semanario Judicial de la Federación* y en los principales periódicos de circulación nacional, la fecha en que deban empezar a funcionar los tribunales colegiados de apelación. Mientras esta conversión no se realice, continuarán funcionando los tribunales unitarios de circuito y las referencias que se hacen a aquéllos se entenderán hechas a éstos últimos.

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

CUARTO. Para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto.

ÍNDICE GENERAL

1. INFORME DEL MINISTRO HUMBERTO ROMÁN PALACIOS, COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ANÁLISIS PARA UNA NUEVA LEY DE AMPARO 5
2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS..... 15
3. PROYECTO DE LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS..... 79
4. ÍNDICE DEL PROYECTO DE LEY DE AMPARO 253
5. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS..... 261
6. PROYECTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS..... 287



